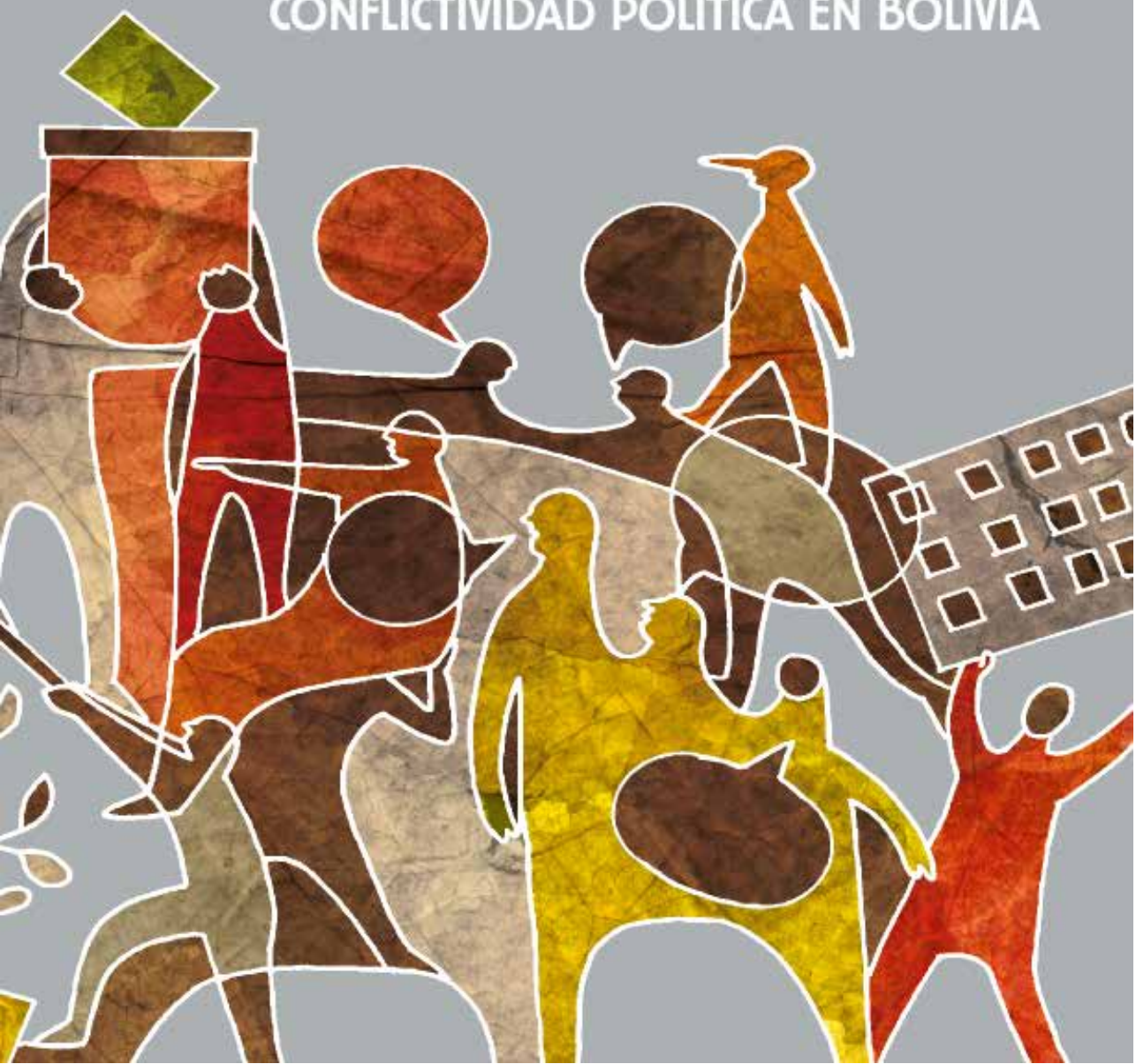


DEL DESENCUENTRO A LA CRISIS

CONFLICTIVIDAD POLÍTICA EN BOLIVIA



DEL DESENCUENTRO A LA CRISIS

CONFLICTIVIDAD POLÍTICA EN BOLIVIA

María Soledad Quiroga
Huáscar Pacheco
Pablo Ríos

Bolivia, julio de 2025



María Soledad Quiroga Trigo
Directora ejecutiva

María Soledad Quiroga Trigo
Huascar Pacheco Ortega
Pablo Ríos Dávila
Equipo de investigación

Pablo Antezana Quiroga
Experto en prospectiva

Martín Sánchez Escobar
Diseño y diagramación

Jorge Dávalos Córdova
Ilustraciones

ISBN: 978-99954-96-29-6
Julio de 2025

Con el apoyo financiero de la
Embajada de Suecia en Bolivia
www.unirbolivia.org

Oficina central
Av. Sánchez Lima N° 2696
Tel. (02) 2117069 – 2115096
conflictos@unirbolivia.org
La Paz, Bolivia

Agradecimientos

Los autores desean testimoniar su reconocimiento a todas las personas que, generosamente, aceptaron ser entrevistadas y aportaron sus puntos de vista para la presente investigación, cuyos nombres figuran al final de este libro.

INDICE

INTRODUCCIÓN	7
 Capítulo I	
LA SITUACIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA	11
I.1 TRAYECTORIA DE LA DEMOCRACIA	11
I.2 EL ESCENARIO POLITICO EN EL PRESENTE	15
I.2.1 Percepciones de los actores políticos, convergencias y diferencias	15
I.2.1.1 Existencia de una crisis multidimensional	15
I.2.1.2 Permanencia del clivaje étnico cultural y territorial	16
I.2.1.3 Debilitamiento de la institucionalidad democrática	16
I.2.1.4 Retroceso en la vigencia y defensa de derechos humanos	18
I.2.1.5 Crisis política	19
I.2.1.6 Ruptura del consenso procedimental	27
I.2.1.7 Fragmentación social	28
I.2.1.8 Inexistencia de mediadores	30
I.2.1.9 Emergencia de un centro democrático	31
I.2.1.10 Realización de elecciones generales	32
I.2.1.1.1 Desafíos para la gobernabilidad	33
 Capítulo II	
LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA EN BOLIVIA	41
II.1 LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN BOLIVIA	41
II.2. CONFLICTIVIDAD POLÍTICA EN BOLIVIA (ENERO DE 2023 – MAYO 2025)	46
II.2.1 PANORAMA DE LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA	47
II.2.2 PRINCIPALES CAMPOS DE CONFLICTIVIDAD	50
II.2.2.1 Judicialización de la política	51
II.2.2.2 Crisis interna del MAS y disputa por el liderazgo	53
II.2.2.3 Crisis de representación	55
II.2.2.4 Crisis económica como catalizador de la conflictividad política	57
II.2.2.5 Parálisis institucional y virtual crisis de gobernabilidad	61
II.2.2.6 Desconfianza electoral	63
II.2.3 PATRONES DE LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA	66

Capítulo III

PERSPECTIVAS DE LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA ELECTORAL (AGOSTO – DICIEMBRE 2025)

73

III. 1. DESARROLLO DEL EJERCICIO DE ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS

73

III.2. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO

82

III.3. ANÁLISIS DE RIESGOS

84

III.3.1 Los riesgos graves en perspectiva

86

FUENTES CONSULTADAS

90

ENTREVISTAS REALIZADAS

92

INTRODUCCIÓN

La práctica política en el país está hondamente marcada por el desencuentro y la confrontación y, con frecuencia, por la violencia. Entre ese carácter que ha permeado a la actividad política y la crisis existe un estrecho vínculo, la situación actual del país lo evidencia: no es posible gestionar el desarrollo en un entorno de continua pugna, llevar adelante una agenda pública dejando al margen a amplios sectores, mejorar la calidad de vida de las personas en medio de tensiones y enfrentamientos, no es posible perfilar un horizonte común si no nos encontramos ni dialogamos.

En un año muy difícil para Bolivia debido a la crisis múltiple que atraviesa, al profundo desencuentro entre los actores políticos y sociales, que ha erosionado tanto la institucionalidad pública como el tejido social, la realización de elecciones generales constituye un desafío democrático de gran trascendencia al que la población parece estar apostando para encontrar una salida.

En este escenario crítico, la Fundación UNIR, con el respaldo de la cooperación de Suecia en Bolivia, se ha propuesto desarrollar un conjunto de actividades que contribuyan a un análisis responsable y con sentido crítico y autocrítico de la situación actual del país, como base para transitar hacia una forma más constructiva de relacionarnos, reduciendo la confrontación y la violencia política y recuperando la esperanza.

Uno de los productos de este esfuerzo es el libro *Del desencuentro a la crisis. Conflictividad política en Bolivia*, que forma parte de la serie de investigación que UNIR viene publicando desde hace más de una década con la finalidad de aportar a una mayor comprensión de la dinámica de la conflictividad social boliviana y a una toma de decisiones informada para hacer posible el desarrollo de procesos democráticos y de paz.

Dado que la presente investigación aborda la conflictividad política en un año peculiar por la realización de los comicios, ha sido diseñada en dos etapas: una pre-electoral cumplida entre septiembre de 2024 y junio de 2025 y que ha dado lugar a la publicación del presente libro, y una segunda postelectoral que tendrá como producto la segunda parte del libro a ser publicada en diciembre del presente año.

Esta primera parte de la investigación incluye el análisis de la situación política del país a partir de la mirada de actores políticos con distintas posiciones, señalando los temas sobre los cuales existen convergencias y aquellos que dan lugar a diferencias, el análisis de las dinámicas y patrones de la conflictividad política boliviana y, finalmente, el planteamiento de perspectivas de la conflictividad política para el corto plazo.

El trabajo se nutre de una variedad de fuentes primarias y secundarias: más de 40 entrevistas a actores políticos clave en seis departamentos; procesos de diálogo entre una amplia gama de actores políticos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, cuya primera etapa tuvo lugar entre marzo y mayo de 2025 y que continuará con posterioridad a las elecciones generales de agosto del presente año; monitoreo y análisis de conflictos políticos durante el período enero de 2023 – mayo de 2025; así como información proveniente de fuentes bibliográficas y documentales.

Gracias a esa riqueza de fuentes ha sido posible bosquejar la compleja situación de crecientes desencuentros, tensiones y conflictos políticos de los últimos años, que ha conducido al país a una cita electoral en condiciones de alta incertidumbre y riesgo. Por ello resulta sumamente valiosa la existencia de criterios comunes entre los diversos actores políticos sobre una variedad de temas significativos, lo que muestra que las distancias no son insalvables, que el diálogo no sólo es necesario, sino que es posible y daría frutos muy valiosos.

En ese sentido, el trabajo en que la Fundación UNIR está empeñada: generar espacios y procesos de encuentro plural, de rescate y valoración de los elementos comunes entre las personas y los colectivos sin desconocer las diferencias existentes, de reconocimiento del otro, de creación de condiciones para un relacionamiento interpersonal, social y político más constructivo, con menor confrontación y violencia, es una vía que está a tono con el sentir de gran parte de los bolivianos y que permitiría perfilar un horizonte de país y, ojalá, formular una agenda para avanzar hacia su consecución.

CAPÍTULO I

LA SITUACIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA



Capítulo I

LA SITUACIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA

Para analizar el complejo panorama político del país en la actual coyuntura electoral es necesario hacer primero un esbozo de la trayectoria de la democracia en Bolivia en las últimas cuatro décadas, desde su recuperación en 1982.

En 2025 se cumplen 43 años de vigencia ininterrumpida de la democracia, puede decirse que, en términos cronológicos, ha rebasado con mucho la mayoría de edad; sin embargo, un análisis de la institucionalidad democrática y de la calidad del ejercicio democrático muestra la existencia de grandes debilidades y de vacíos significativos que develan que la democracia boliviana se encuentra aún lejos de la madurez.

Ese largo período –que se aprecia aún más extenso considerando la accidentada y vertiginosa historia política del país– no fue de ningún modo homogéneo, pudiéndose reconocer tres fases políticas distintas:

I.1 TRAYECTORIA DE LA DEMOCRACIA

Fase de democracia pactada (1985 – 2003) se inició con un alto respaldo ciudadano a los actores políticos tradicionales y se prolongó por cerca de veinte años, debilitándose progresivamente hasta su crisis terminal en 2003. En un movimiento pendular clásico, después de la malograda experiencia de gobierno de la UDP, que dejó una situación económica crítica con una hiperinflación que afectó severamente la economía popular, en las elecciones de 1985 los candidatos más votados fueron los conservadores, Hugo Banzer y Víctor Paz, sin alcanzar ninguno mayoría, por lo cual el Congreso debió elegir entre los más votado y se inclinó por el segundo.

Con la finalidad de salir de la aguda crisis, Paz Estenssoro asumió una serie de drásticas medidas de ajuste estructural, cuyo emblema fue el DS 21060, las cuales – pese al alto costo social que implicaron – pudieron ser impuestas debido a la prioridad que la población otorgó a la superación de la crisis económica. En los años siguientes, con una economía estabilizada, los partidos del sistema político tradicional (MNR, ADN, MIR) desarrollaron gestiones de gobierno actuando como aliados y/o como rivales, bajo un modelo liberal de nuevo cuño que modernizó el Estado y, en cierta medida, lo democratizó, aunque sin satisfacer las crecientes demandas populares, que ya no podían ser frenadas. En el año 2000 el descontento de los sectores campesino e indígena, que habían avanzado hacia demandas transformativas, dio lugar a intensas protestas en el altiplano, las cuales contribuyeron a empoderarlos como actores políticos y debilitaron al gobierno de Banzer; la errada lectura de la coyuntura nacional por el nuevo gobierno de

Sánchez de Lozada condujo a la crisis política de 2003 y a su caída junto con el sistema de partidos políticos.

Fase de hegemonía del MAS (2006 – 2015) El ascenso del MAS al poder fue resultado de la crisis antes mencionada y del empoderamiento indígena, el cual esa organización política parecía representar. El MAS se definió como un gobierno indígena, contaba con un amplio respaldo popular y de los sectores medios y se vio fortalecido por el proceso constituyente –cuyo basamento legal fue establecido entre los años 2004 y 2005 y que culminó en 2009 con la aprobación de la nueva CPE, más fruto de compromisos políticos que de la genuina voluntad popular– planteado como una “refundación del país” que iba a reparar la ausencias e injusticias de la República. El Gobierno, sostenido por el conglomerado de organizaciones de base denominado Pacto de Unidad, con el franco apoyo de los sectores medios, con las élites derrotadas y la virtual anulación de los partidos tradicionales –y con un amplio respaldo internacional, que permitió la condonación de la deuda externa del país– dispuso de cinco años de gestión despejada de cualquier inquietud y riesgo, durante los cuales se implementaron políticas que gozaron de amplio apoyo.

Durante esta fase el MAS se constituyó en partido único logrando construir hegemonía a partir del apoyo de prácticamente todo el espectro de organizaciones sociales, de lo que quedaba de los partidos políticos de izquierda y de los sectores medios de la población; en ese escenario, y dados los obstáculos establecidos por el partido de Gobierno –siguiendo su vocación centralista, poco abierta a compartir espacios de deliberación y decisión– fue muy difícil que nuevas organizaciones políticas surjan y se desarrollen.

El resquebrajamiento de la unidad en torno al MAS se inició en su segunda gestión de gobierno a raíz de dos hechos decisivos: la aprobación, vía DS en diciembre de 2010, de un aumento de hasta 83% del precio de los carburantes, lo cual desencadenó la vigorosa protesta de distintos sectores sociales que obligaron al Gobierno a dar marcha atrás; el segundo hecho que profundizó el quiebre fue la decisión gubernamental de construir una carretera atravesando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (Tipnis) que en 2011 dio lugar a una marcha de los pueblos indígenas del Beni hacia la sede de gobierno, la cual fue duramente reprimida en Chaparina. Estos conflictos enfrentaron al Gobierno con quienes habían constituido su base social de apoyo, los sectores populares y los pueblos indígenas, condujeron al quiebre del Pacto de Unidad, le restaron el apoyo de las clases medias y redujeron su credibilidad al irse perfilando cada vez con mayor claridad que la voluntad de concentrar y mantener el poder se había impuesto sobre la necesidad de realizar las transformaciones que requería y demandaba el país.

El progresivo agotamiento de los años de vacas gordas empezó a hacerse visible a partir de 2015: el crecimiento económico se ralentizó pasando de 6,8 en 2013 a 5,5 en 2014 y a 4,9 en 2015, aunque los efectos de esta declinación aún no eran

tangibles para la mayoría de la población; las reservas internacionales bajaron de \$us 15.123 millones en 2014 a \$us 13.055,9 millones en 2015¹ y el empleo estable se redujo de 60% a 40% entre 2006 y 2016².

Fase de declive del MAS (2016 – 2025) La derrota que sufrieron Evo Morales y García Linera en el referendo vinculante de 2016, en su intento de ser electos por tercera vez consecutiva, y la habilitación de sus candidaturas pese al resultado negativo que obtuvieron, detonaron la profunda crisis política gestada en los años previos y cuyos hitos fueron los dos conflictos antes mencionados. Las muy cuestionadas elecciones de 2019 generaron una movilización ciudadana de grandes dimensiones en el conjunto del país, creando una situación de ingobernabilidad que concluyó con la renuncia de los mandatarios y de todos los altos cargos del MAS y dejó un vacío de poder.

La crisis política de 2019 se prolongó debido a dos factores, por una parte la muy deficiente gestión del gobierno de transición y la determinación de la presidenta Añez de presentarse a las elecciones, lo cual no correspondía al carácter provisional de su administración y, por otra parte, la actitud confrontacional del MAS. La elección de Luis Arce en 2020 pareció dar una salida a la crisis, apreciación que fue desmentida por sus decisiones políticas que no hicieron más que corroborar la continuidad de las prácticas del MAS: eliminación del requisito de dos tercios de la Asamblea Legislativa para la aprobación de temas clave, lo que obligaba a concertar con la oposición, inicio de acciones judiciales contra exautoridades, dirigentes políticos y sociales por el supuesto golpe de Estado, amnistía para los militantes del MAS encausados por hechos de violencia en 2019, falta de interés en cualquier acercamiento y diálogo con los actores de oposición y cooptación o división de las organizaciones sociales y de la sociedad civil.

La crisis política se ha complejizado en los últimos años, no por razones ideológicas, sino como resultado de la pugna interna del MAS entre Morales, quien está determinado a volver al gobierno, y Arce que intenta retener el poder.

A esta crisis se suma la económica iniciada una década antes y que desde entonces no ha hecho más que profundizarse, los siguientes datos son elocuentes:

- Crecimiento de la economía: 4,3% en 2016, 3,5% en 2022, 3,1% en 2023 y 2,1 hasta el tercer trimestre de 2024³, según el Banco Mundial se cerró ese año con un crecimiento de 1,4⁴.
- Déficit fiscal: 10,9% del PIB en 2023⁵, se estima que subió a 12% en 2024⁶.

1 Banco Central de Bolivia. (2016). *Administración de las Reservas Internacionales. Gestión 2015*.

2 *El Deber*, 27 de abril de 2018

3 Datos del Instituto Nacional de Estadística.

4 Banco Mundial (2025). *Perspectivas económicas mundiales*.

5 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2024). *Boletín económico. Informe fiscal 2023*.

6 La Razón, 3 de febrero de 2025.

- Reservas internacionales: \$us 10.081 millones en 2016, 8.946 millones en 2018, \$us 6.467 millones en 2019, \$us 5.275 millones en 2020, \$us 4.752 millones en 2021, \$us 3.796 millones en 2022, \$us 1.709 millones en 2023, \$us 1.976 millones en 2024 (las más bajas en sesenta años)⁷.
- Deuda externa \$us 13.333 millones y una deuda pública total que representaría 45,1% del PIB⁸, aunque fuentes independientes la estiman en \$us 43.173 millones, lo cual según el FMI representaría 86,7% del PIB.
- Inflación: 0,9% en 2021⁹, 3,1% en 2022¹⁰, 2,1% en 2023¹¹ y 9,97% en 2024¹². Incremento del costo de vida: entre 2010 y 2019 el precio de la canasta alimentaria mensual aumentó de Bs 1.519¹³ a Bs 2.640¹⁴; en septiembre de 2024 el precio de la mayoría de los productos se había triplicado¹⁵ y en abril de 2025, cuando el IPC registró un aumento de 1,7% –el más alto en cuatro décadas– el INE reconoció la existencia de un “problema inflacionario bastante complejo”¹⁶.
- Disparidad en la cotización del dólar iniciada en 2024 (oficial Bs 6,96 y paralelo más de Bs 15 en junio de 2025).
- Declive en la producción de hidrocarburos iniciado en 2016 y creciente importación (85% del diésel y 56% de la gasolina por un monto que ha pasado de \$us 1.257,2 millones en 2015 a \$us 2.680,9 millones en 2024¹⁷), manteniéndose la subvención al precio de los combustibles, lo cual representa una sangría para el Estado.

La pugna interna del MAS y la crisis económica son los factores que han provocado su implosión; cada vez más distante de las organizaciones sociales que lo conformaron y dieron vida –con excepción de los grupos que participan directamente en la actual gestión gubernamental, de los sindicatos cocaleros del Chapare fieles a Morales y de algunos otros grupos campesinos y urbanos– y de los sectores medios que le dieron su apoyo durante varios años, enfrenta grandes dificultades para mantenerse en el poder y para sobrevivir como organización política

7 La Razón, 8 de enero de 2025.

8 Ministerio de Economía y Finanzas. (2024, 18 de noviembre). *La deuda pública total consolidada de Bolivia se encuentra por debajo de los umbrales internacionales de sostenibilidad*.

9 INE. (2022, 5 de enero). *Índice de Precios al Consumidor registra incremento de 0,16% en diciembre de 2021*

10 INE. (2023, 5 de enero). *Índice de Precios al Consumidor registra incremento de 0,12% en diciembre de 2022*

11 INE. (2024, 4 de enero). *Índice de Precios al Consumidor registró una variación acumulada de 2,12% en diciembre de 2023*

12 INE. (2025, 3 de enero). *El Índice de Precios al Consumidor registró una variación positiva de 1,06% en diciembre de 2024*

13 Central Obrera Boliviana, 2010.

14 Promedio entre datos de la Central Obrera Boliviana, de la Fundación Jubileo y del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, 2019.

15 ANF, 5 de septiembre de 2024.

16 Humberto Arandía, director del INE, en *Los Tiempos*, 9 de abril de 2025.

17 La Razón, 12 de junio de 2025.

Así, se llega a la coyuntura electoral de 2025 con un sistema democrático debilitado, sin partidos políticos con genuina capacidad de representación y propuesta, con un evidente desencanto respecto a los políticos y a la política, un profundo agotamiento ante la crisis multidimensional y sin horizonte de futuro.

I.2. EL ESCENARIO POLITICO EN EL PRESENTE

Todo parece indicar que la situación actual del país es propia de un final de ciclo, lo que se verifica por la existencia de una crisis multidimensional: política, económica, social y cultural, iniciada hace una década. Aunque los síntomas de esta situación son evidentes es probable que gran parte de la población no la identifique como un final de ciclo, aunque esta percepción inequívoca está presente de manera contundente en la intersubjetividad de los bolivianos.

Al parecer, el arco temporal de alrededor de dos décadas de duración de los ciclos políticos en el país (ciclo del MNR, ciclo de la democracia liberal pactada y ciclo del MAS) se verifica nuevamente. Muestras claras de ello son el agotamiento del proyecto político del MAS que deja en el camino esperanzas frustradas y una realidad crítica con una institucionalidad profundamente debilitada, una sociedad fragmentada que ha perdido el norte, un Estado insolvente, falta de alternativas de desarrollo económico, incremento geométrico de la informalidad y de actividades económicas ilícitas (minería ilegal, contrabando, narcotráfico) y empobrecimiento general de la ciudadanía, así como un deterioro ambiental muy severo.

I.2.1 Percepciones de los actores políticos, convergencias y diferencias

La indagación realizada para la presente investigación entre actores políticos con distintas posiciones de seis departamentos del país, así como el desarrollo de la primera etapa de los procesos de diálogo que la Fundación UNIR lleva adelante con la pluralidad de los actores políticos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, permiten afirmar la existencia de importantes coincidencias con relación a la situación actual del país, lo cual muestra que pese a las diferentes posiciones ideológicas –hoy claramente menguadas–, a la fragmentación política y a la lógica confrontacional prevaeciente, la contundencia de los hechos es tal que no deja margen de duda.

A continuación, se exponen los temas abordados en su análisis por los diversos actores políticos consultados, señalando las convergencias y diferencias:

I.2.1.1 Existencia de una crisis multidimensional que se fue ahondando progresivamente y hoy es inocultable, afectando los distintos ámbitos de actividad y la calidad de vida de los bolivianos.

"... tenemos una confluencia macabra o terrible de crisis política, crisis económica, hay una crisis ambiental (...) genera un sentimiento, un estado de ánimo de deterioro, de que no somos capaces."¹⁸

I.2.1.2 Permanencia del clivaje étnico cultural y territorial que no ha podido resolverse pese a que, en sus inicios, el MAS se planteó erradicar el racismo y la discriminación, aprobando para ello una ley específica, y a pesar de la promulgación de una Ley Marco de Autonomías y Descentralización y de la realización de varios referendos sobre este tema, ambas problemáticas siguen pendientes y constituyen un factor que divide al país.

"Los clivajes que debió haber resuelto el MAS no ha terminado de resolverlos, como es el pacto territorial, el tema de las autonomías que han sido tuteladas, o sea se ha traicionado esa agenda, el étnico cultural que creo que ha sido instrumentalizado, pero nunca se lo ha trabajado con un horizonte de interculturalidad."¹⁹

I.2.1.3 Debilitamiento de la institucionalidad democrática, aunque esta debilidad es crónica se ha acentuado notablemente. El Estado no tiene presencia efectiva en el conjunto del territorio del país, el Estado de derecho es sumamente precario (Bolivia obtuvo una calificación de 1,6% ocupando el puesto 131 entre 142 países y el puesto 29 entre los 32 países de América Latina y el Caribe²⁰) y, como reflejo de esto, las normas básicas de convivencia social se han visto muy afectadas. En consonancia con esta debilidad, la credibilidad de las instituciones públicas es muy baja: según una encuesta internacional de 2024 sólo 12% confiaba en el Gobierno central; 20% en la Asamblea Legislativa Plurinacional; 18% en el Tribunal Supremo Electoral; 13% en el Poder Judicial (el nivel más bajo en la región); 23% en las Fuerzas Armadas y 16% en la Policía Nacional (los más bajos de la región)²¹. En 2025 la situación no es mejor: 61% de las personas consultadas manifestó percibir una muy baja confianza en el Gobierno, 62% en el caso de la Asamblea Legislativa, 72% con relación al TCP y 78% al Órgano Judicial; ni siquiera el TSE, encargado de asegurar transparencia del proceso electoral, logra una mayor confianza: 29% baja y 15% muy baja²².

18 Miguel Castro, entrevista.

19 Erika Brockmann, entrevista.

20 World Justice Project. (2024). *Índice Global de Estado de Derecho 2024*.

21 Corporación Latinobarómetro. (2025). *Informe Latinobarómetro 2024*.

22 Fundación Friedrich Ebert. (2025, 19 de febrero). *Contexto y escenarios prospectivos 2025*

El caso del Tribunal Constitucional Plurinacional merece ser señalado puesto que sus controversiales determinaciones de la última década han generado efectos políticos de gran calado, como la sentencia emitida en 2017 sobre el "derecho humano" a la reelección indefinida de Evo Morales, desconociendo el resultado del referendo de 2016, y su sentencia de 2023 que anula la anterior y establece que no se puede ejercer la presidencia y vicepresidencia más de dos veces de manera continua o discontinua; a esto se suma la irregular prórroga en sus cargos de cinco de sus magistrados. Estas actuaciones han generado la percepción de que el TCP ha dejado de lado su rol y se ha convertido en un actor político de enorme poder.

"Hay una judicialización y esto ha provocado ciertas relaciones críticas entre órganos del Estado: entre el ejecutivo y el legislativo, entre el judicial, vía Tribunal Constitucional, y el legislativo, y entre el TCP y el Tribunal Supremo Electoral."²³

"El TCP y la Fiscalía son actores políticos clave en este escenario electoral que pueden trastocar lo que vaya a ocurrir porque a partir de su alianza con el poder de turno (...) pueden trabar las elecciones, postergarlas..."²⁴

En un contexto electoral, la credibilidad del TSE reviste fundamental importancia, por lo cual la afectación producida por su actuación en 2019 y en general por la crisis institucional, resulta preocupante —existen dudas especialmente con relación a la calidad del padrón electoral—, aunque distintos actores políticos le reconocen méritos por la realización de dos cumbres que actuaron como centro ordenador del proceso electoral, conjurando el riesgo de que el TCP lo desestabilice o interrumpa²⁵. En ese sentido es importante que el TSE dé señales de su independencia e idoneidad técnica a fin de fortalecer la confianza ciudadana.

"...yo creo que si existe algo en el padrón de distorsión o de calidad y confiabilidad debe ser no más de 5% en el peor de los casos."²⁶

Uno de los mayores problemas que afectan la institucionalidad democrática es la falta de independencia de los poderes del Estado, lo cual se puede ejemplificar en el caso del Órgano Judicial, el cual responde siempre al gobierno central, como

23 Fernando Mayorga, entrevista.

24 Raykha Flores, entrevista.

25 Erika Brockmann, Ricardo Fuentes, entrevistas.

26 Erika Brockmann, entrevista.

quedó crudamente expuesto durante la última década: persecución de los opositores durante la gestión de Morales, persecución de los seguidores de éste durante el gobierno de Añez y de la expresidenta y sus correligionarios durante la gestión de Arce y actuación del TCP ya mencionada.

"(El TCP) tiene un poder que puede desequilibrar o confrontar el poder de la Asamblea Legislativa y del propio Tribunal Supremo Electoral."²⁷

La profunda debilidad de la institucionalidad pública y la situación de virtual parálisis en que se encuentra como resultado de las pugnas políticas que han bloqueado al Legislativo y han dificultado el accionar del Ejecutivo, con serias repercusiones a nivel de los gobiernos subnacionales, han conducido a una suerte de crisis de gobernabilidad.

En esas condiciones, el país se aproxima a un estado de anomia, como se puede apreciar por la recurrencia de situaciones como las siguientes:

- Uso de la fuerza para imponer decisiones en distintos campos; un caso reciente es el de los *Ponchos Rojos* de Achacachi, quienes retuvieron a cuatro vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz protestando por la nueva cartografía y por las circunscripciones electorales definidas con base en el censo de población y vivienda de 2024, obligando al TED a reponer las circunscripciones anteriores²⁸.
- Uso de grupos afines al MAS para reprimir protestas, evitando así la presencia policial.
- Uso intensivo de recursos naturales para generar ingresos —que en varios casos dan lugar a una significativa acumulación— por actores formales, informales e ilegales: cooperativas mineras, avasalladores de tierras de comunidades indígenas, fiscales y privadas, ocasionando enfrentamientos entre sectores y grupos de la sociedad, así como severos daños ambientales.
- Crecimiento de actividades ilegales, como el contrabando, la comercialización de vehículos indocumentados y de ropa usada, actividades que pese a estar prohibidas por las normas vigentes se desarrollan e incluso cuentan con organizaciones que las representan y que negocian con el Estado. Ocupación de áreas territoriales por actividades delictivas, como el narcotráfico y la trata y tráfico de personas, a las cuales el Estado no tiene acceso.

I.1.1.4 Retroceso en la vigencia y defensa de derechos humanos, tema que pareciera haber sido dejado de lado en la agenda política de los últimos años, así

27 George Komadina, entrevista.

28 ANF, 8 de abril de 2025.

como en los programas de gobierno de las distintas organizaciones políticas que participarán en las elecciones de agosto e incluso en las entrevistas realizadas para la presente investigación, en las cuales no se ha abordado el tema de la manera que lo merece.

"Para las personas que estamos en la lucha por los derechos humanos esto es preocupante porque la vida no puede reducirse sólo la economía (...) veo con preocupación la ausencia de propuestas progresistas y de defensa de los derechos humanos."²⁹

En un marco nacional y global en que se está produciendo un retroceso en ese ámbito, los protagonistas de la lucha por la vigencia de los derechos humanos están significativamente ausentes en la actual contienda electoral, lo cual resulta preocupante.

"Los movimientos subalternos, antipatriarcales, feministas, LGBT, movimientos indígenas, esto es una autocrítica, hemos quedado absolutamente relegados de este escenario."³⁰

I.2.1.5 Crisis política que estalló en 2019 y que desde entonces ha ido adquiriendo cada vez mayor hondura.

"...la crisis mayor o la madre de las crisis es la crisis de la democracia porque si solucionas esta crisis con un pacto entre los actores que están en conflicto, que podamos tener un resultado aceptable en las elecciones de agosto, en las subnacionales del próximo año, creas un escenario democrático mínimo como para encarar las otras crisis."³¹

La crisis política puede caracterizarse por los siguientes elementos:

Inexistencia de un sistema de partidos políticos: falta de estructura partidaria en las organizaciones existentes, vacío programático e incapacidad para cumplir su función de mediación y representación de los intereses ciudadanos. La falta de

29 Christian Egüez, entrevista.

30 Christian Egüez, entrevista.

31 Miguel Castro, entrevista.

credibilidad de los partidos es notoria: en 2024 sólo 10% de la población confiaba en ellos³².

"Hay una crisis de los partidos políticos como factores de mediación, los partidos políticos no están cumpliendo su función o definitivamente no existen partidos políticos en Bolivia."³³
 "... están mostrando como rasgos su bajo perfil ideológico, su escasa democracia interna, su clientelismo, su improvisación organizativa."³⁴
 "La mayor crisis de los partidos políticos es que ninguno ha logrado encontrar una oferta que se conecte con lo que los bolivianos están queriendo, un horizonte minimamente compartido."³⁵

Un fenómeno actual, que es resultado de la inexistencia de un sistema de partidos políticos, es lo que ha dado en llamarse patrimonialización de la sigla; varios de los partidos que participarán en las elecciones de agosto son organizaciones vacías que se ofrecen a cualquier candidato con opciones electorales, al margen de la ideología y del programa que plantee.

"... el sistema político es un sistema de siglas formales, aparente (...) el síndrome de partidos sin militantes, partidos aparentes, sin líderes competitivos (...) y líderes aislados, solitarios, que están buscando una sigla, eso es lo que se está dando."³⁶
 "...pareciera que solamente se reorganizan, se rearticulan, en torno a comicios electorales y no en torno a propuestas."³⁷
 "...compra de espacios, compra de curules, manipulación de la prensa, uso de los recursos públicos para la campaña, están muy presentes, la población está por eso con ese rechazo, esa apatía por lo que está pasando en la política."³⁸

Indudablemente, esta situación no hace sino contribuir al descrédito de los partidos y de la propia actividad política. Por otra parte, una cuestión vinculada con la práctica política concebida como medio para generar ingresos es la dimensión que ha adquirido la burocracia estatal –casi 527 mil empleados públicos en 2020,

32 Fundación Friedrich Ebert. (2025, 19 de febrero). Contexto y escenarios prospectivos 2025

33 Franz Flores, entrevista.

34 Ricardo Fuentes, entrevista.

35 Miguel Castro, entrevista.

36 Erika Brockmann, entrevista.

37 Ana Lucía Gavarreque, entrevista.

38 Patricia Paputsakis, entrevista.

con un crecimiento anual de al menos 10%³⁹—, una gran cantidad de personas que trabajan con los partidos en las campañas electorales, son empleadas para retribuir su apoyo y, por tanto, se ven obligadas a apoyar incondicionalmente al oficialismo a fin de conservar su puesto de trabajo.

Organización política de partido único durante dos décadas. La reducción del escenario político a un solo actor, el MAS, partido con presencia nacional, asentado en las grandes organizaciones sociales y con un significativo respaldo ciudadano, ha afectado la práctica política del país al haber dejado de lado el pluralismo, requisito básico de la democracia. Hoy el desgaste y quiebre interno de ese partido ha roto el esquema vigente dejando un evidente vacío. La división del MAS a propósito de la controversia entre Arce y Morales por el liderazgo de la organización y la participación electoral tiene dos interpretaciones, por una parte los afines a Morales señalan que el Gobierno ha operado en contubernio con el TCP para inhabilitarlo y quitarle la sigla—algunos actores consideran que la obstaculización gubernamental a la candidatura del expresidente está llevando a un enfrentamiento generalizado⁴⁰—, por otra parte los seguidores de Arce plantean que el afán de Morales de recobrar el poder ha quebrado el partido y dañado la economía del país. Desde otro punto de vista, la crisis interna del MAS no sería sólo una crisis de poder, sino también expresión de la necesidad del Estado Plurinacional de contar con otros actores, contenidos y visiones para consolidarse⁴¹.

En todo caso es evidente que el MAS ya no es un partido hegemónico, aunque mantiene arraigo político y electoral en distintas regiones del país; sin embargo, el crédito de las dos alas de la organización (Arce y Morales) se ha deteriorado severamente tanto por la pugna interna como por inconductas que, como resultado de ésta, salieron a la luz.

Durante el ciclo de hegemonía del MAS la oposición fue muy debilitada, puesto que ese partido no permitió el desarrollo de otras partidos organizaciones que abran algún claro en su cerrado control del poder. Esa situación y las propias debilidades internas de la oposición: falta de estructuras partidarias sólidas, de una práctica interna democrática, crítica y autocrítica, de presencia territorial y conexión con los sectores populares, especialmente en áreas rurales—existen dudas sobre su arraigo en sectores populares, al orientarse principalmente a la clase media⁴²—, la han limitado para plantear alternativas y visiones de país que representen a la mayoría de la sociedad y tengan posibilidades de cuajar en procesos constructivos.

39 INESAD. (2020, 10 de febrero). *El aparato estatal tiene 526 mil funcionarios; por año crece 10%*

40 Sergio de la Zerda, entrevista.

41 Franz Flores, entrevista.

42 Gabriela Canedo, entrevista.

"(La oposición) no ha mostrado hasta el momento capacidades para pasar de una oposición de resistencia, en minoría, a construir un proyecto de oposición alternativa."⁴³

Aunque inicialmente los precandidatos de oposición plantearon la unidad a fin de conformar una opción electoralmente viable, primó la competencia entre las distintas agrupaciones y personas, la prevalencia de los liderazgos individuales por encima de los programas colectivos, impidiendo la consolidación de una propuesta común.

"Uno se une en torno a proyectos, afinidades, si no en base a qué puede convocar una unidad, y todas las convocatorias que hay a unidad son simplemente proclamas, consignas."⁴⁴

Es necesario reconocer que la crisis política es responsabilidad del conjunto de los actores políticos, tanto del MAS como de la oposición, su accionar ha contribuido a la falta de propuestas, al empobrecimiento del debate público y al descrédito general de la actividad política. Así, el escenario actual vaciado de contenido, hondamente fragmentado y debilitado, sin actores sólidos que gocen de credibilidad, deja al país sin certidumbre de cara a las elecciones de agosto y sin opciones viables dado que quien resulte ganador seguramente tendrá dificultades para lograr gobernabilidad y estabilidad, con el riesgo de que la crisis política se prolongue.

Tránsito de la polarización a la fragmentación política, durante los años de hegemonía del MAS en que las fuerzas opositoras se vieron marginadas del escenario político se construyó una relación de clara polarización entre ambos, la cual llegó al paroxismo en 2019, ahondándose la brecha y generándose profundos rencores que permearon a la sociedad. De acuerdo a una encuesta reciente, a fines de 2023, 65% de la población boliviana estaba polarizada⁴⁵.

"El país ha retrocedido por la política de la polarización, esto de tomar partido por el grupo afín, esta forma de absorción de las organizaciones que tuvo el MAS, al final las ha deteriorado y ha hecho que su voz, hoy, en un momento de crisis, valga muy poco."⁴⁶

43 George Komadina, entrevista.

44 Centa Rek, entrevista.

45 Proyecto UNAMONOS. (2024). *Segunda encuesta nacional de polarización*.

46 Vladimir Peña, entrevista.

En algunos actores políticos prevalece una visión binaria que sustenta la polarización: para aquellos afines al MAS, éste representa la izquierda con arraigo popular, propuesta y capacidad transformadora, mientras que las organizaciones opositoras representan a la derecha que propone un liberalismo político y económico y, según los más radicales, carecen de propuestas y son racistas; para las agrupaciones opositoras al MAS, más allá de sus diversas posiciones, éstas tendrían como denominador común su convicción democrática frente a las prácticas autoritarias, prebendales e instrumentalizadoras de temas sensibles, como el étnico cultural, de ese partido. En este binarismo las posiciones son irreductibles y no conciben tender puente alguno hacia el otro.

La situación actual, con el quiebre del MAS en tres facciones y la frustrada unidad de la oposición, puede caracterizarse como un trizamiento político que deja atrás la polarización. Uno de los analistas consultados⁴⁷ percibe que la división del MAS ha contribuido a disminuir la polarización al haber desequilibrado el enfrentamiento de las distintas organizaciones opositoras con el bloque masista. Otro analista⁴⁸ ve la existencia de polarización entre los sectores campesino indígena y urbano periférico, con una visión de lo popular vinculada a la pertenencia étnica y demandas orientadas al bienestar inmediato (disponibilidad de combustible, control de la elevación de precios, etc.) y los sectores medios urbanos no indígenas con demandas de estabilización –probablemente liberalización de la economía– y de acciones que permitan recuperar la institucionalidad democrática. Esta polarización no sería propiamente de tipo político partidario, aunque implica inclinaciones por determinadas organizaciones políticas.

En todo caso, sea que la polarización se mantenga o que haya transitado a una fragmentación mayor, es evidente que la tendencia es al desencuentro.

Práctica política confrontacional, una de las características de la dinámica política boliviana a lo largo de la historia, la cual se ha acentuado en los últimos quince años a partir de algunas situaciones críticas (el conflicto del Tipnis, el referendo de 2016 y la crisis político electoral de 2019). Hoy es evidente que esta práctica resulta estéril, parece haberse agotado y que ha hastiado a la población, la cual demanda una dinámica menos frustrante y dolorosa, más constructiva.

47 Fernando Mayorga, entrevista.

48 Guido Cortez, entrevista.

"Los actores políticos y los actores sociales han asumido, interiorizado, lógicas de confrontación, una cultura de bloqueos, de acciones violentas."⁴⁹

"Hay un ensimismamiento muy peligroso, que es coherente con la polarización, con la necesidad de ver al rival como un enemigo irredimible y con la imposibilidad de ver al contendiente como un potencial aliado para generar acuerdos y las condiciones para que se apliquen planes de desarrollo, medidas económicas."⁵⁰

"...desde la beligerancia, desde el atrincheramiento, desde la consigna, desde la sobreideologización de las cosas, no se logra nada, absolutamente nada."⁵¹

Desgaste de los liderazgos políticos, erosión del liderazgo carismático de Evo Morales y falta de nuevos líderes en las distintas organizaciones políticas, clara demanda ciudadana de renovación, la cual no ha sido atendida en la presente coyuntura electoral. Aunque para los partidarios del MAS, Andrónico Rodríguez sería el exponente de la renovación –la analista Emma Lazcano considera que constituiría una opción de “continuismo renovado”–, desde otros puntos de vista no habría tal renovación ya que ésta no es una cuestión de edad, sino de propuesta y Rodríguez no sólo se formó con Morales, sino que ha expresado su reconocimiento y lealtad a éste.

Escasa responsabilidad de los líderes políticos, lo cual se expresa en su deficiente interpretación de la realidad del país y en la ausencia de una actuación acorde a la difícil situación actual y a las necesidades de la población, muestra de lo cual es la paralización de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la enconada pugna electoral.

"Los partidos políticos han puesto su cuota parte para agudizar la crisis, no han podido concertar espacios de discusión sincera, han vuelto la Asamblea Legislativa un escenario de enfrentamiento y, en otros casos, un escenario de tráfico de influencias y de sobornos."⁵²
"No vemos liderazgos con una visión de país, todo es inmedatista, es decirle a la gente lo que quiere, no lo que el país necesita a largo plazo."⁵³

49 George Komadina, entrevista.

50 Vladimir Torres, entrevista.

51 Miguel Castro, entrevista.

52 Vladimir Torres, entrevista.

53 Erika Brockmann, entrevista.

Estrategias maximalistas de algunas dirigencias políticas como parte de la cultura política del país –de acuerdo con una entrevistada sería maximalista, machista y mitómana⁵⁴–, que no está en sintonía con lo que piensa y demanda la mayoría de la población. En los discursos radicales de esas dirigencias se advierte una deficiente lectura del escenario de fragmentación social y de agotamiento de los bolivianos por la larga duración de la polarización y los efectos negativos de la crisis múltiple.

Apelación a recursos ilegítimos en la lucha política En la situación de crispación política instalada en el país hace ya varios años, los actores políticos han echado mano a recursos impropios, como la desinformación y manipulación de la opinión pública mediante las redes sociales e incluso los medios de comunicación tradicionales que, en varios casos, están controlados por los poderes políticos, dejando a la ciudadanía sin información fidedigna e incrementando la incertidumbre y el malestar social.

"Las redes sociales están creando realidades paralelas."⁵⁵

"La desinformación va a ser el combustible del conflicto electoral."⁵⁶

Efectos políticos de la crisis económica la crisis económica por la que atraviesa el país es interpretada de distintos modos por los actores políticos consultados, mientras que para los opositores es muestra del fracaso del modelo económico implementado por el MAS en sus gestiones de gobierno, los que adhieren a éste defienden a rajatabla el modelo, aunque el ala evista critica el manejo de éste por el actual gobierno y los afines a Arce consideran a Morales el causante de la crisis por el bloqueo efectuado en la Asamblea Legislativa.

"... son síntomas de un modelo fracasado que tenía más fines políticos que otra cosa (...) el MAS toma decisiones económicas en función de la política y de una cierta política, que es la concentración del poder."⁵⁷

"... el Gobierno no solamente ha traicionado nuestro liderazgo político, también nuestro modelo económico."⁵⁸

54 Erika Brockmann, entrevista.

55 Emma Lazcano, entrevista.

56 Fátima Tardío, entrevista.

57 Cecilia Requena, entrevista.

58 Sergio de la Zerda, entrevista.

En esto, como en otros asuntos, resulta evidente la dificultad generalizada de asumir responsabilidad política y la tendencia a adjudicarla a otros, especialmente a los adversarios políticos.

En todo caso es claro que el país se enfrenta a la necesidad de repensar su matriz productiva puesto que el ciclo del gas parece haberse agotado debido a varios factores: falta de exploración en la última década, mantenimiento de la subvención al precio de los combustibles que ha generado una carga fiscal insostenible y deficiente gestión de YPFB. Según expertos⁵⁹, en 2025 Bolivia tendrá que importar mayores volúmenes de gasolina y se verá obligada a importar gas licuado de petróleo y en 2027 o 2028 también gas natural, por lo cual creen necesario eliminar los subsidios, abrir la importación al sector privado, dejando al Estado la regulación y supervisión de calidad y precio, y encarar la exploración de nuevos yacimientos. La adopción de esas u otras medidas para evitar una agudización de la crisis se ha visto postergada por el cálculo político electoral, dejando esa tarea en manos del gobierno que surja de las elecciones de agosto de 2025.

La caída de los ingresos fiscales por la reducción de la producción hidrocarbúfera se fue agravando, entre otras causas, por el elevado gasto público para mantener una frondosa burocracia que absorbe 27% del presupuesto del Estado (el Gobierno central concentra 76% de éste, 16% el municipal, 4% el departamental y 5% las universidades públicas⁶⁰) y que, como se explicó, se debe a la primacía de los compromisos e intereses políticos.

Los efectos de la crisis sobre la calidad de vida de la población son evidentes, aunque no hay información actualizada al respecto es claro que actualmente amplios sectores se encuentran en situación de pobreza moderada y extrema.

"...la gente de las comunidades de la zona (municipio de Tiquipaya, Cochabamba) ya no se compran un kilo de pollo, sino que están negociando por lo cogotes, y la gente dice '¿Qué ha pasado?'"⁶¹

Al parecer, la crisis gestada hace más de una década ha conducido a ciertas modificaciones de la dinámica laboral y reivindicativa de los sectores populares: los sindicatos fabriles, que solían ser firmes en sus demandas, han adoptado una actitud más conciliadora a fin de no poner en riesgo los puestos de trabajo y los campesinos han optado por diversificar sus actividades, trabajando estacionalmente en el Oriente y norte de Chile y volviendo a las comunidades para la producción agropecuaria⁶².

59 Álvaro Ríos, especialista en hidrocarburos y director de *Gas Energy Latin America*, en ANF, 30 de octubre de 2024.

60 Fundación Jubileo. (2024). *El destino del presupuesto público*.

61 Emma Lazcano, entrevista.

62 Emma Lazcano, entrevista.

Sin duda, la crisis económica ha generado efectos políticos de envergadura, como la caída del apoyo al actual gobierno y el cuestionamiento al modelo económico del MAS, aunque es probable que a nivel de base no se identifique con claridad el origen de la debacle.

Resulta clara la apelación al descontento popular por la situación económica a fin de lograr réditos políticos, como se ha observado en las movilizaciones del ala evista que puso la crisis económica como estandarte de sus demandas de habilitación electoral del expresidente.

"...hay incremento de precios en la canasta básica, hay este problema de escasez de dólares, ha habido problemas con el combustible, y el resultado es que hay protestas y demandas sectoriales de gremiales, de transportistas, a lo que se ha sumado, como parte de esta pugna interna en el MAS, acciones directas propiciadas por los seguidores de Evo Morales, por el MAS como partido, con apoyo de algunas organizaciones sindicales que enlazan los dos temas: sus objetivos políticos con demandas de la sociedad respecto a la economía."⁶³

La crisis económica ha conducido a una situación en la cual el voto tendrá un carácter eminentemente pragmático: se apoyará a quien pueda resolver los problemas económicos; por otra parte, una gran cantidad de personas que dependen del Estado intentarán preservar sus puestos de trabajo votando por los candidatos con mejores posibilidades de asegurarlos.

Aunque se espera que el próximo gobierno se ocupe prioritariamente del tema económico, no se puede desconocer la existencia de un ánimo colectivo pesimista en cuanto a una resolución pronta de la crisis.

"Hay una gran incertidumbre sobre la viabilidad económica del país, antes había fe en los recursos naturales, pero ya terminó el ciclo del gas y el ciclo del litio se pinta muy incierto, hay relatos y propaganda, mucha más propaganda que información."⁶⁴

1.2.1.6 Ruptura del consenso procedimental Algunos analistas⁶⁵ consideran que el consenso sobre las normas democráticas está averiado, actualmente las propias reglas del juego son objeto de disputa, lo cual es una muestra de la magnitud

63 Fernando Mayorga, entrevista.

64 Erika Brockmann, entrevista.

65 Luciana Jáuregui, entrevista.

de la crisis que afecta al sistema democrático en su conjunto y genera inestabilidad e incertidumbre.

"Cada vez más sectores piensan que las reglas democráticas no sirven."⁶⁶

Teniendo en cuenta que Bolivia está próxima a la realización de un proceso electoral de trascendental importancia, vale la pena recordar la fórmula "certidumbre en las reglas, incertidumbre en los resultados", que está en la base de ese mecanismo de la democracia y sobre el cual, al parecer, hoy existen dudas.

1.2.1.7 Fragmentación social dada la significación de la política en la cultura nacional, la constante confrontación política ha influido de manera considerable en la sociedad. El daño que ha causado al tejido social es notable, hoy la sociedad boliviana se encuentra profundamente fragmentada; si cerca de 20% de la población tuvo que cortar lazos con familiares, amigos y colegas por disputas acerca de lo ocurrido en 2019 y 51% prefería no hablar de política con familiares y amigos para evitar peleas⁶⁷, es previsible que actualmente la situación sea similar considerando los profundos rencores existentes entre las facciones del MAS, entre este partido y los de oposición y entre las diferentes organizaciones en pugna electoral.

"Ningún candidato en este momento tiene capacidad de movilización popular, movilización de multitudes, de masas, ni siquiera base electoral, todo está fragmentado."⁶⁸

La crisis multidimensional y especialmente la pugna política han incrementado la desconfianza social: Bolivia es el país con mayor nivel de desconfianza interpersonal en la región, la cual fue decayendo dramáticamente en la última década, de 58,9% en 2012 a 40,4% en 2023⁶⁹. La desconfianza y el temor hacia los otros, hacia quienes se desconoce o se presume que tienen una posición política distinta a la propia, ha conducido también a un crecimiento de la intolerancia.

A tono con esto, las organizaciones sociales se encuentran deslegitimadas, menos de un cuarto (24%) de la población confía en los sindicatos⁷⁰. La creciente desconfianza ciudadana en las organizaciones sociales está vinculada al rol que

66 Oscar Ortiz, entrevista.

67 Souverein, J., Stolte, C., Velasco, A, Proyecto Unámonos. (2023). *Polarización política y social en Bolivia* (pag. 21).

68 Eduardo Lohnhoff, entrevista.

69 Ciudadanía, KAS, 2024. *La democracia en los ojos de la gente, 25 años de cultura política en Bolivia*.

70 Corporación Latinobarómetro. (2025). *Informe Latinobarómetro 2024*

éstas han asumido como medios para acceder al gobierno y desde allí beneficiar a su sector y particularmente a las dirigencias.

"...los movimientos sociales que han sido totalmente cooptados, corporativizados, viciados, ya no tienen una visión del país, sino una visión absolutamente estricta a partir de su condición de movimiento y una lucha por espacios, no de poder para decidir políticas, sino de acomodo."⁷¹

"Las organizaciones sociales son parte de una estructura de gobierno y aspiran a ser gobierno y tener poder; las organizaciones sociales corporativas que sustentan al MAS tienen una lógica que legitima el poder a partir de intercambios clientelares."⁷²

Como resultado del estrecho vínculo tejido entre las organizaciones sociales y el MAS a lo largo de sus distintas gestiones de gobierno, la implosión de ese partido ha arrastrado a las organizaciones en su caída, acentuando la fragmentación social. Así, las organizaciones sociales, primero divididas por su posición a favor del oficialismo o de la oposición, y luego por la pugna al interior del MAS, han perdido independencia, confianza de sus bases y de la ciudadanía en general y se han debilitado considerablemente: Cidob a raíz del conflicto por el Tipnis de 2011; Conamaq dividida sucesivamente, en 2014 por una facción oficialista, en 2025 en un sector afín al Gobierno de Arce y otro que sigue a Morales; los productores de coca de Yungas divididos en 2021 por un sector oficialista; la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia fragmentada en 2023 en un ala oficialista y otra afín a Morales⁷³, así como ocurrió en 2024 con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y con la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa dividida en un ala arcista y otra evista enfrentadas entre sí.

Las organizaciones de la sociedad civil también fueron divididas: la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, entidad que por su naturaleza debe preservar su independencia del poder, en 2023 fue escindida por un sector afín al MAS; el Colegio Médico de Bolivia dividido en 2018 mediante la creación de un organismo paralelo, la Confederación Médica de Bolivia.

El debilitamiento político y social ha conducido a un quiebre de la representación, es decir a la ausencia de sentido de vinculación entre las bases y sus repre-

71 Miguel Castro, entrevista.

72 Erika Brockmann, entrevista.

73 La Razón, 20 de agosto de 2023.

sentantes, así como al surgimiento de una aguda desconfianza hacia las dirigencias en general.

"No vemos liderazgos responsables, los estatutos orgánicos de las seis federaciones (del Trópico) son más importantes que la Constitución (...) es importantísimo que se empiece a relativizar y cuestionar la falta de responsabilidad social y política de aquellos líderes sociales que tienen un rol de incidencia política."⁷⁴

"Creo que es parte de la fragmentación también que cada uno está representando su propio particularismo y se radicaliza en su particularismo."⁷⁵

En este panorama fragmentado, las organizaciones sociales que en el pasado era actores políticos con visión nacional y capacidad de plantear propuestas de país, se han reducido a una actuación reivindicativa pequeña que frecuentemente da la espalda a los intereses de las mayorías y del país.

"Cada actor de la sociedad civil organizada pide al Estado algo: piden ventajas, sean arancelarias, que no les cobren impuestos, como hacen los choferes, y cada sector sale pero no con una visión de país integral, sino mirando sus propios intereses particulares."⁷⁶

Algunas corporaciones han acumulado un enorme poder económico y político, gracias al cual han logrado ocupar cargos de alto nivel en el Estado y pueden doblar el brazo al gobierno para que satisfaga sus intereses, es el caso de cooperativistas mineros, productores de coca y otros sectores que se han convertido en poderes fácticos.

"Bolivia se ha vuelto un gobierno de corporaciones (...) en esta angurria de poder no permiten que nadie gobierne sin ellos (...) todo se trata de pegas, partidos, manejo de la Asamblea, desde cosas pequeñas hasta grandes."⁷⁷

74 Erika Brockmann, entrevista.
75 Luciana Jáuregui, entrevista.
76 Eduardo Lohnhoff, entrevista.
77 Fátima Tardío, entrevista.

1.2.1.8 Inexistencia de mediadores o terceros imparciales que apoyen el establecimiento y cumplimiento de acuerdos, el desarrollo de procesos de pacificación en situaciones de crisis y que se constituyan en veedores confiables de los procesos electorales.

"Había un sector medio de intelectualidad urbana que buscaba mediar, la polarización ha barrido con todo eso y no hay mediación (...) si hay algo que generar, para mí, es ese tercero."⁷⁸

Si bien se han constituido entidades de la sociedad civil para la observación electoral, como *Observa Bolivia* y otras, en previsión de tensiones y conflictos y ante la ausencia de mediadores, la observación de las elecciones por organismos internacionales adquiere mayor importancia.

"Va a ser clave el desempeño de los observadores internacionales y de los actores internacionales como mediadores (...) una de las tragedias lamentables de nuestra época es que prácticamente se han perdido los mediadores y conciliadores locales válidos."⁷⁹

1.2.1.9 Emergencia de un centro democrático como resultado de los cambios socioeconómicos operados en el país en las últimas décadas: la urbanización de la población boliviana y el crecimiento de las capas medias por la incorporación de sectores populares que mejoraron sus ingresos mediante el acceso a cargos públicos y el desarrollo de actividades económicas, sobre todo en el comercio. Estos grupos poblacionales están interesados en la estabilidad y se ubican en posiciones más bien moderadas, huyendo de los radicalismos de cualquier signo.

"...entender lo que ha pasado para no irnos de nuevo como un péndulo de un lado al otro, sino aprendamos de eso y generemos un centro virtuoso que recupere lo que ha sido este proceso de 15, 20 años y que se combine con lo que necesita el país hacia el futuro y eso implica pacto, eso implica diálogo, eso implica reconocer al otro."⁸⁰

"El centro está planteando algunas cosas distintas (...) una economía más mixta, mantener el Estado Plurinacional, pero con un proceso de mayor integración social, como que ya es tiempo de la negociación."⁸¹

78 Emma Lazcano, entrevista.
79 Vladimir Torres, entrevista.
80 Miguel Castro, entrevista.
81 Luciana Jáuregui, entrevista.

"La polarización ha terminado hastiando a la gente y ha cedido un nuevo espacio en el medio, entonces hoy tenemos el bloque de izquierda populista que ha reducido de una mayoría a un tercio, la oposición tradicional de derecha que mantiene un poco más de un tercio y ahora hay otro tercio en el medio."⁸²

"La gente está esperando un centro y los discursos van a ir a eso, busquemos el consenso, busquemos el acuerdo."⁸³

Sin embargo, hay que anotar que algunos actores consultados no creen que las posiciones de centro sean viables en la actual coyuntura del país ya que advierten que éste continúa polarizado.

1.2.1.10 Realización de elecciones generales

Las elecciones generales son siempre actos de gran importancia ya que definen el derrotero del país, pero las elecciones de agosto de 2025 revisten especial significación en tanto son asumidas por los bolivianos como la alternativa para iniciar un proceso que permita superar la crisis múltiple, especialmente la económica. Como señala uno de los entrevistados, "la gente está actuando con muchísima madurez y paciencia"⁸⁴.

Si hasta fines de 2024 existía un alto nivel de incertidumbre sobre la realización de las elecciones, en el presente año esas dudas parecen haberse despejado, aunque persiste la incertidumbre respecto a que sus resultados sean los que se requiere para alcanzar el objetivo antes planteado.

"... el Evo, por un lado, va a cañonear las elecciones y, por otro lado, la oposición va a volver al discurso del fraude..."⁸⁵

Lo que a dos meses de la justa electoral parece cierto es que no se logrará tener una definición en la primera vuelta debido a la fragmentación política y al desencanto ciudadano con los distintos partidos, por lo que será necesaria una segunda vuelta. Esta perspectiva implica que la definición de la composición del Legislativo será previa a la elección de los primeros mandatarios, lo cual no permitirá que el nuevo gobierno cuente con mayoría parlamentaria, dificultándose la gobernabilidad.

82 Vladimir Peña, entrevista.

83 Franz Flores, entrevista.

84 Álvaro Orozco, entrevista.

85 Franz Flores, entrevista.

"Todos los actores están apuntando claramente a una cuota de poder en la Asamblea, entienden que es una elección no hegemónica, que nadie va a ser electo en primera vuelta."⁸⁶

Por otra parte, la práctica política irrespetuosa de las normas vigentes, agravada por lo que se perfila como un cuestionamiento de las reglas del juego, genera dudas sobre si los actores políticos –los que están en la contienda electoral y los que quedaron fuera– aceptarán los resultados. Es evidente que, si se producen cuestionamientos de parte de organizaciones políticas con capacidad de movilización de masas, esto puede conducir a un escenario sumamente complejo.

"...no parece ser que los partidos que participen en las elecciones acepten llanamente el resultado, eso va a afectar la institucionalidad, que va a seguir afectando la crisis económica."⁸⁷ "Los políticos ven el proceso electoral como un juego de suma cero."⁸⁸

Es de esperar que la madurez y la convicción democrática de los bolivianos prevalezcan sobre los intentos de imponer intereses particulares y las elecciones se realicen con normalidad y transparencia a fin de contar con un nuevo gobierno legítimo.

1.2.1.11 Desafíos para la gobernabilidad

De acuerdo a la percepción general, el gobierno que emerja de las elecciones será más bien débil ya que, como se señaló, se prevé que no tendrá un respaldo mayoritario y será una gestión de transición en tanto es poco probable que resuelva los problemas económicos durante su mandato. Puesto que no se alcanzará mayoría en la Asamblea Legislativa será necesario establecer alianzas y pactos, lo cual representa un gran desafío dado que se trata de una práctica eliminada de la actuación política de las últimas dos décadas. El establecimiento de acuerdos mínimos con otras organizaciones políticas significará un aprendizaje de un nuevo tipo de práctica política.

"Vamos a tener un Parlamento sin mayorías claras y eso puede ser bueno porque vamos a necesitar una mayor pedagogía política, el hecho de que Morales y el MAS durante 20 años haya tenido una mayoría aplastante ha hecho que el Parlamento pierda vitalidad democrática."⁸⁹

86 Santiago Terceros, entrevista.

87 Ricardo Fuentes, entrevista.

88 Guido Cortez, entrevista.

89 Vladimir Peña, entrevista.

En beneficio de la salud democrática del país se requiere que los acuerdos a establecer sean legítimos, es decir que respondan a necesidades reales y sean transparentes –ojalá respaldados institucionalmente– y no fruto de la prebenda o de la amenaza.

"Vamos a necesitar acuerdos y si esos acuerdos no están mediados por partidos, por instituciones, son acuerdos que se median de maneras muy violentas o muy corruptas o ambas cosas."⁹⁰

Asimismo será preciso desarrollar un nuevo modelo de gobernabilidad basado en el diálogo, la búsqueda de puntos de encuentro y acuerdos, tomando lección de la situación de parálisis en que se encuentra el actual gobierno por la disputa política. Sin embargo, que las dirigencias políticas se orienten hacia la concertación no es tarea sencilla ya que la cultura política construida en estos años ha desacreditado los acuerdos y pactos.

"Lo básico de la política es hacer acuerdos, hacer pactos, y nadie está pensando en pactos, la democracia pactada se ha satanizado, puede tener un montón de defectos, pero la democracia, la política si pactos, no existe."⁹¹

"Hay que relativizar los dogmas y tratar de disminuir la ecuación que dice que la concertación es igual a traición (...) toda concertación y cesión de algún punto es una traición a los principios, a los valores, a la disciplina, a los estatutos orgánicos."⁹²

Distintos actores políticos consideran necesario concebir de manera distinta el relacionamiento del gobierno con los otros actores políticos y con los distintos sectores y regiones del país, dejando de lado la visión amigo-enemigo y abriéndose al reconocimiento de los otros como actores válidos en tanto representan las perspectivas de sectores de la población boliviana.

90 Cecilia Requena, entrevista.

91 Miguel Castro, entrevista.

92 Erika Brockmann, entrevista.

"...otro modelo de gobernanza, ya no a partir de una hegemonía secante (...) gestión más horizontal, ya no concentrada en La Paz y en el Poder Ejecutivo, sino en gobernar con la Asamblea Legislativa, lo que requiere acuerdos, pactos, estructurar el Poder Judicial, manejar mejor el tema del centralismo, de la descentralización, otorgar más recursos a las regiones, involucrar a los municipios, a las gobernaciones, en un modelo mejor distribuido del poder político."⁹³

Si la adopción de medidas económicas para salir de la crisis está respaldada por acuerdos políticos habrá mayores posibilidades de que dichas políticas sean efectivas y que no dañen demasiado al gobierno; si las fuerzas políticas no se avienen a ello será muy difícil superar la crisis.

"La crisis económica, para ser resuelta, y para asumir medidas de las características que necesita Bolivia, previamente requiere, como condición, un pacto político."⁹⁴ "La misma gente demandará una gran concertación nacional para salir de la crisis, del color que sea, de la forma que sea, no importa."⁹⁵

Dada la hondura de la crisis económica, las medidas a adoptar serán severas (definición sobre el tipo de cambio, sobre la subvención de combustibles, reducción del tamaño de la burocracia estatal, política de austeridad) y, por tanto, pueden ser muy cuestionadas por la ciudadanía, dando lugar a protestas que podrían poner en riesgo la gobernabilidad, de modo que si no existen acuerdos políticos se inviabilizarían y la crisis económica se agudizaría aún más.

"...un proceso de estabilización necesariamente tiene que recurrir a herramientas de corte liberal, de austeridad algunas, se puede poner límites, hacer una transición más humanista, pero no puede liberarse de ese tipo de herramientas."⁹⁶

Sin embargo, algunos analistas perciben que, a nivel popular, existiría cierta apertura a la realización de las reformas necesarias para superar la crisis.

93 George Komadina, entrevista.

94 Andrés Gómez, entrevista.

95 Álvaro Orozco, entrevista.

96 Erika Brockmann, entrevista.

"... proclive a aceptar cambios, inclusive la gente de las comunidades, los sectores populares, a un planteamiento de ajuste liberal."⁹⁷

En cualquier caso, será necesario que el programa económico a aplicar incorpore políticas sociales que permitan mitigar los efectos negativos sobre los sectores más vulnerables e ir superando los problemas existentes en los ámbitos del empleo, de la salud y la educación y de la calidad ambiental.

"... si no va emparejado de políticas sociales que igualen o favorezcan a sectores que están marginados y en posición de subalternidad, tampoco se va a poder construir o salir del atolladero."⁹⁸

El período de gracia que se concede a las nuevas autoridades no suele ser muy largo, menos aún en una situación como la actual en que la atención de los problemas económicos centrales tiene carácter de urgencia, esto significa que la paciencia de la población no será muy dilatada, pudiendo optar por la presión en las calles a inicios del siguiente año o, como máximo una vez pasado el Carnaval.

"...después de agosto la gente va a entrar en la lucidez de que no le dieron soluciones, las empresas, microempresarios, va a haber mayores aprietos, las empresas públicas deficitarias, y ante ese panorama puede empezar un poco duro, convulsión."⁹⁹

Por otra parte, el nuevo gobierno, cualquiera sea el vencedor, tendrá serias dificultades para lidiar con las presiones que ejercerán los sectores sociales y económicos que han acumulado poder en los últimos veinte años y que pretenderán imponer sus demandas.

"...hay que tener mucho cuidado con las seis federaciones, mucho cuidado con el cooperativismo minero, creo que es un poder fáctico hoy día que ningún candidato puede obviar para asegurar gobernanza a futuro."¹⁰⁰

Dada la envergadura y complejidad de las tareas que le tocará desarrollar al próximo gobierno será necesario contar con un liderazgo político sólido, que

pueda conducir con responsabilidad y de manera firme el proceso de transición, generando certidumbre en la población.

"Se va a requerir un liderazgo muy fuerte, capacidades de gobierno de generar consensos, no solamente entre los círculos de los políticos profesionales, sino también con actores sociales."¹⁰¹

Finalmente hay que tener en cuenta que, dada la hondura de la crisis y las serias afectaciones que está causando, existen altas expectativas hacia el nuevo gobierno y las acciones que tome para resolver los problemas en un plazo muy breve, lo cual no será fácil cumplir.

"Hay unas expectativas altísimas en la sociedad (...) para que el gobierno que asuma cumpla con estas promesas (...) la presión social va a estar dirigida a exigir transformaciones y soluciones inmediatas."¹⁰²

Si en los primeros meses del próximo año no se aligera el peso de la crisis económica es probable que la paciencia de la gente se agote y se genere una crisis política de envergadura.

Entre los riesgos para la gobernabilidad y para la democracia que los actores identifican se encuentran el desarrollo de una alta conflictividad social si la crisis económica se mantiene, las presiones de parte de los entes corporativos, como el cooperativismo minero, para lograr ventajas y beneficios, las acciones desestabilizadoras que pueda impulsar Evo Morales si no logra acceder al poder; esos y otros temas igualmente problemáticos que fueron desatendidos y postergados por razones políticas, se han ido complejizando y ya no podrán ser eludidos.

"El próximo gobierno va a enfrentar muchos conflictos porque todo lo que tendría que haber resuelto este gobierno no lo está resolviendo, sino que lo está pasando."¹⁰³

Considerando todos estos factores, se identifica un conjunto de tareas que habrá que asumir en el futuro inmediato, además de las medidas económicas urgentes: el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el saneamiento del aparato

97 Emma Lazcano, entrevista.

98 Gabriela Canedo, entrevista.

99 Centa Rek, entrevista.

100 Erika Brockmann, entrevista.

101 George Komadina, entrevista.

102 Christian Egüez, entrevista.

103 Andrés Gómez, entrevista.

estatal, cualificando la gestión pública y erradicando las prácticas corruptas, la transformación de la práctica política confrontacional abriéndose al pluralismo, adoptando el diálogo y el establecimiento de acuerdos políticos y la reducción de la violencia política, entre las principales.

"...es necesario un diálogo nacional constructivo para poder encaminar el país hacia una visión inclusiva y próspera (...) las diferentes fuerzas políticas ponen pesos y contrapesos, generan una democracia más participativa."¹⁰⁴ "...tenemos que hacer una campaña de tolerancia (...), de consideración del respeto de los derechos del otro, de aceptación de la disidencia."¹⁰⁵ "Uno de los puntos clave es crear comunidad, resarcir, volver a tejer ese tejido social tan raído que nos ha dejado el conflicto político."¹⁰⁶

Estar a la altura de este desafío exigirá un gran esfuerzo tanto de los actores políticos, de las dirigencias sociales, de los líderes de opinión, como de la propia ciudadanía. La inspiración para encararlo tendría que provenir de aquellos momentos de la historia del país en los cuales se pudo salir de la oscuridad gracias a la entereza de la colectividad y a la lucidez de quienes la guiaron.

"¿Cómo Bolivia ha sido capaz de hacer las cosas que ha hecho, los cambios que ha producido sin los 30.000 muertos de Argentina o sin los 60.000 de Sendero Luminoso en el Perú? Hay algo en esta sociedad que permite, con toda beligerancia, con toda la estridencia, salir y ojalá que esto no sea la excepción, que salgamos de esta con algo nuevo, algo superador de lo que estamos viviendo."¹⁰⁷

104 Centa Rek, entrevista.

105 Ricardo Fuentes, entrevista.

106 Gabriela Canedo, entrevista.

107 Miguel Castro, entrevista.

CAPÍTULO II

LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN BOLIVIA



los tres niveles del Estado (30%), la crisis económica (28%) y los vinculados a temas legales (10%).

En cuanto a la gestión pública, resaltan las protestas por deficiencias en la prestación de servicios educativos, de salud y de mantenimiento de vías, las que suelen presentarse de manera estacional, por el inadecuado funcionamiento de entidades públicas, como la Caja Nacional de Salud, Derechos Reales y las responsables del transporte urbano, entre otras.

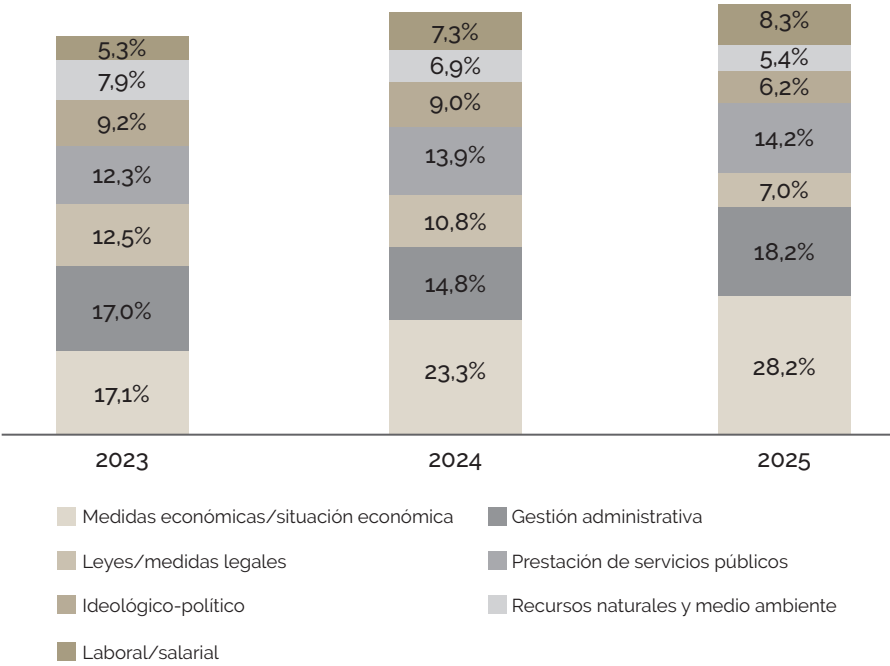
Las movilizaciones por temas económicos se concentraron en tres tipos de demanda: en primer lugar las ya tradicionales de incremento de las tarifas de transporte, control de rutas y rechazo a normas municipales de vialidad, mantenimiento de áreas de comercialización y rechazo al control municipal, así como medidas contra el contrabando; en segundo lugar las vinculadas a la gestión municipal: recursos económicos para la realización de obras públicas previstas en los POA y atención de emergencias; en tercer lugar las demandas generadas por la crisis económica: provisión de combustible, control de la inflación y circulación de dólares, protestas que se están intensificando con evidentes efectos políticos.

La falta de recursos de los gobiernos subnacionales está generando protestas masivas, como ocurre en Tarija a raíz de la promulgación de la Ley de Emergencia Económica que establece eliminación de bonos y programas de ayuda y recorte general de gastos.

Es necesario mencionar que los conflictos por temas laborales se han reducido, pese a la falta de empleo y a la precarización de éste, posiblemente esto se explique por el crecimiento desmesurado de la informalidad (85% de la PEA) y la pérdida de esperanza de la población de encontrar empleo formal. La mayoría de las protestas laborales son protagonizadas por el sector público de salud, educación y trabajadores municipales reclamando el pago de salarios y la contratación de personal, reclamando por despidos y, en general, demandando mejora de las condiciones de trabajo.

La conflictividad por temas legales reclama justicia en casos de delitos contra las personas, evidenciando tanto la creciente violencia existente en el país como la corrupción e inoperancia del sistema de administración de justicia. Hay que señalar que, en una cantidad significativa de casos, se exige la aprobación o derogación de normas legales, especialmente de nivel subnacional, a fin de satisfacer intereses sectoriales (normas de reordenamiento vehicular, restricciones al comercio en vías públicas, rechazo a la ampliación de la mancha urbana, etc.).

Gráfico N°1 Tipología de los conflictos

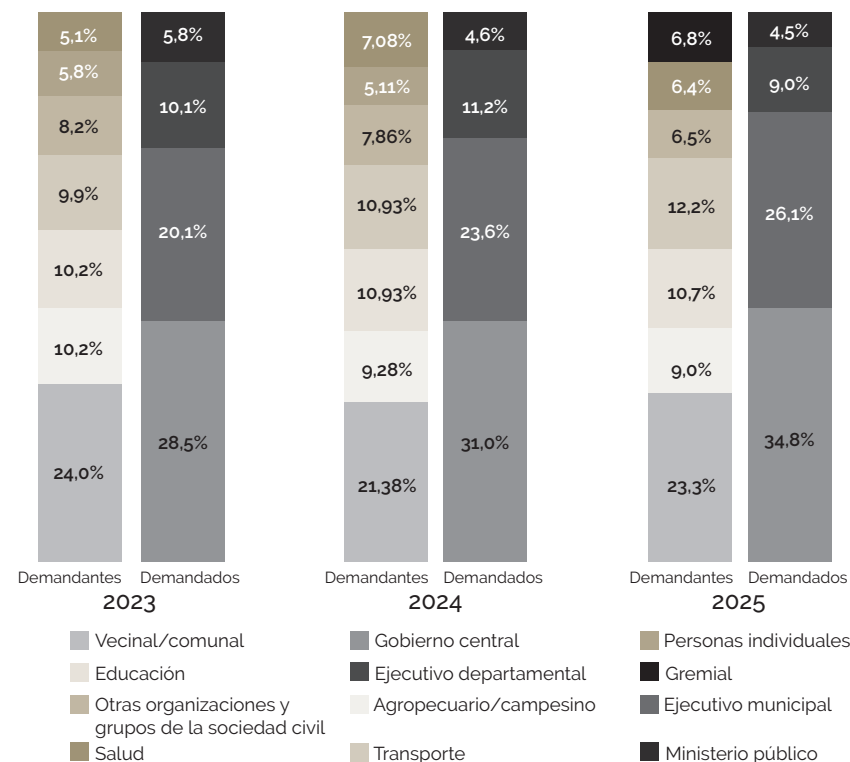


Fuente: elaboración propia

Los actores principales de la conflictividad social son pobladores urbanos y rurales sin un respaldo organizacional (por una variedad de temas locales y de carácter nacional); destaca también el sector educación (magisterios urbano y rural y padres de familia, con demandas diferenciadas); el campesino (por el avasallamiento de tierras, demandando proyectos productivos, incremento del precio de sus productos y control del contrabando, protestando por los incendios forestales e involucrados en el conflicto interno del MAS); el sector transporte (encabezando las protestas por la falta de combustible y dólares y demandado el incremento de sus tarifas).

Hasta inicios de 2020 los gobiernos municipales recibían la mayor parte de las demandas debido a su cercanía a la población, la pandemia de Covid 19 redireccionó esta tendencia, concentrándolas en el Ministerio de Salud y el Gobierno central; actualmente se mantiene esa lógica, la cual se ha visto reforzada por la crisis económica, cuya resolución recae en el Ejecutivo.

Gráfico N°2 Sectores demandantes y demandados



Fuente: elaboración propia

A nivel territorial la conflictividad social se desarrolla principalmente en los tres departamentos del eje, lo cual es congruente con su importancia demográfica económica y política, si bien en algunos momentos otros departamentos, como Chuquisaca y Oruro, fueron escenario de una importante cantidad de conflictos de carácter local y con escasa incidencia en el contexto nacional. La Paz, en su calidad de sede de gobierno, es el teatro de la mayor parte de las movilizaciones por demandas de carácter nacional, incluyendo las disputas electorales y las protestas por la crisis económica. Santa Cruz, como centro productivo del país y bastión de la oposición política, concentra igualmente una gran cantidad de conflictos. Cochabamba es relevante en el ámbito político al tratarse del terreno de Evo Morales, por lo cual las movilizaciones impulsadas por ese sector del MAS tienen mayor alcance y radicalidad.

En cuanto a la radicalidad de los conflictos, durante el presente período no se alcanzaron niveles altos, lo cual puede parecer paradójico considerando la difícil coyuntura y la gravedad de los problemas por los que atraviesa el país; sin embargo, la cantidad de personas directamente afectadas por las protestas es alarmante: más de 1.200 heridos y una veintena de muertos. Este saldo doloroso no es resultado de la conflictividad en general, sino de eventos puntuales en los que actuaron sec-

tores tradicionalmente violentos, como avasalladores de tierras y cooperativistas mineros, en los cuales se produjo un escalamiento del conflicto. Se debe considerar también que algunos conflictos vinculados a las crisis económica y política actuales alcanzan niveles altos de radicalidad, como las movilizaciones de afines a Morales que dejaron fallecidos y heridos.

El análisis de la conflictividad en el período estudiado permite identificar un cambio relevante en la movilización social, la naturaleza de las demandas, los actores involucrados y la dinámica de los conflictos han mostrado una evolución significativa.

Durante el año 2023, la conflictividad estuvo marcada por demandas de carácter sectorial; las movilizaciones respondían, en su mayoría, a intereses específicos de grupos particulares: gremiales, transportistas, maestros, trabajadores de salud, juntas vecinales, etc. Estas protestas se centraban en problemas puntuales vinculados con la gestión pública local, la prestación de servicios, el cumplimiento de normas y compromisos institucionales y las condiciones laborales. Se trató de una movilización fragmentada, con escasa articulación entre los actores y territorializada. En esas condiciones se registró una gran cantidad de conflictos que, al tener carácter local y ser de corta duración, no generaron una percepción negativa.

A partir de 2024 esa dinámica comenzó a modificarse. La crisis económica empujó a diversos sectores sociales a movilizarse en torno a los problemas comunes, principalmente a la elevación de precios de la canasta familiar y falta de combustible. Las protestas, antes aisladas, empezaron a articularse en demandas de alcance nacional y los conflictos adquirieron un carácter más estructural. A esto se sumó la creciente tensión política en el oficialismo, particularmente la pugna interna en el MAS, que se extendió a organizaciones sociales, afectando a la población.

En el actual contexto se está produciendo un fenómeno interesante, que es propio de momentos en los que algún problema concentra la atención pública: se reduce la cantidad de conflictos debido a la agregación de demandas y actores y aumenta su duración e impacto; así, las movilizaciones se hacen más visibles, persistentes y difíciles de atender. Es lo que ocurre con los conflictos vinculados a la crisis económica y a la gestión pública, que son de difícil solución, por lo cual los demandados acuden a promesas de atención futura o a acuerdos momentáneos, sin atender las causas de fondo a fin de desactivar las medidas de presión. Esta práctica evasiva va incrementando la tensión social, acumulando el potencial conflictivo latente y complejizando los casos que vuelven a activarse ante el incumplimiento de compromisos y la agudización de los problemas estructurales, especialmente con relación a cuestiones básicas, como el abastecimiento alimentario y de materias primas para la producción.

La difícil situación económica de la población influye en la dinámica de la conflictividad puesto que movilizarse implica un costo que actualmente no es posible afrontar; esta contención no puede entenderse como pasividad, más bien se trata de una postergación de las acciones colectivas a fin de atender la necesidad prioritaria de generar ingresos, lo cual significa una acumulación silenciosa de descontento social que podría expresarse con fuerza a mediano plazo. El horizonte

electoral próximo está funcionando como una válvula de escape, una esperanza de cambio y solución a los problemas, si esas expectativas no son satisfechas el escenario postelectoral podría estar marcado por una reactivación de la conflictividad con demandas renovadas y mayor confrontación.

II.2. CONFLICTIVIDAD POLÍTICA EN BOLIVIA (ENERO DE 2023 – MAYO 2025)

En los dos últimos años Bolivia atravesó un periodo de conflictividad política intensa, variada y extendida territorialmente. Las movilizaciones no sólo aumentaron en frecuencia, sino también en complejidad, involucrando a una variedad de actores sociales: cívicos, indígenas, vecinos, sindicatos y políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Más que una simple acumulación de protestas, lo que se observa es un proceso de transformación de las formas de expresión del malestar, las motivaciones que impulsan los conflictos y las estrategias de los actores para plantear demandas motivadas en distintos intereses o disputar poder.

"Más que una simple acumulación de protestas, lo que se observa es un proceso de transformación en las formas de expresión del malestar."¹⁰⁹

Esta etapa de la conflictividad política se desarrolla en un contexto de fragilidad institucional, marcada por la crisis del Órgano Judicial, la paralización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el descrédito de la institucionalidad pública y la ruptura interna del MAS. A esta crisis institucional se suma una crisis económica que ha impactado directamente en las condiciones de vida de la población por la escasez de combustibles y dólares y el encarecimiento de productos básicos, lo que ha dado lugar a una significativa conflictividad política que distingue claramente este período de los precedentes.

"La crisis política y la crisis económica han generado de cierta manera una crisis constitucional también."¹¹⁰ "Estas condiciones no sólo han detonado conflictos sectoriales, sino que han actuado como catalizadores de disputas políticas más amplias."¹¹¹

El país se encuentra atravesado por múltiples capas de conflicto, que se superponen, interactúan y refuerzan mutuamente. Las movilizaciones no respon-

109 Raykha Flores, entrevista.

110 Viviana Mariscal, entrevista.

111 Luciana Jáuregui, entrevista.

den únicamente a intereses corporativos o sectoriales; muchas de ellas expresan cuestionamientos estructurales al funcionamiento del Estado, a la legitimidad de los actores políticos y a las reglas del sistema democrático. La desconfianza en las instituciones, el vacío de representación y la confrontación entre oficialismo y oposición (y dentro del propio oficialismo) han conformado un escenario político altamente volátil, en el que la protesta en las calles ha reemplazado a los mecanismos institucionales para la gestión de demandas.

"Los actores han optado por dar mayor empuje a sus posiciones, y no hay una posibilidad de apertura, que es fundamental para generar espacios en común, espacios de diálogo sincero."¹¹²

Es, pues, necesaria una lectura estructurada del actual ciclo de conflictividad política, para lo cual se plantea la clasificación de los casos en campos analíticos que permitan comprender mejor su emergencia y dinámica, los cuales no deben entenderse como compartimentos estancos, sino como ejes interrelacionados que facilitan la observación y análisis.

II.2.1 PANORAMA DE LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA

El presente período debe entenderse dentro de un entramado de procesos estructurales y coyunturales que han transformado el modo en que se desarrollan las disputas por el poder. Si bien en términos cuantitativos los conflictos políticos no son muy significativos, su relevancia radica en el impacto sistémico que generan: erosionan la gobernabilidad democrática, paralizan el funcionamiento institucional y profundizan la fragmentación del país y el desánimo de la población.

"No se cree en los partidos, no se cree en el sistema electoral, no se cree en el órgano judicial... la gente está como sin suelo institucional."¹¹³

En un contexto de deslegitimación institucional, en el que los principales órganos del Estado –Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, TCP y otros órganos judiciales, Ministerio Público e incluso TSE– son percibidos más como instrumentos políticos, que como garantes del cumplimiento de las normas vigentes y de generación de los necesarios equilibrios. En ese marco, el agotamiento del modelo político del MAS y la profunda fractura en su liderazgo que ha desencadenado una disputa abierta entre el presidente Arce y el expresidente Morales, no sólo ha

112 Vladimir Torrez, entrevista.

113 George Komadina entrevista.

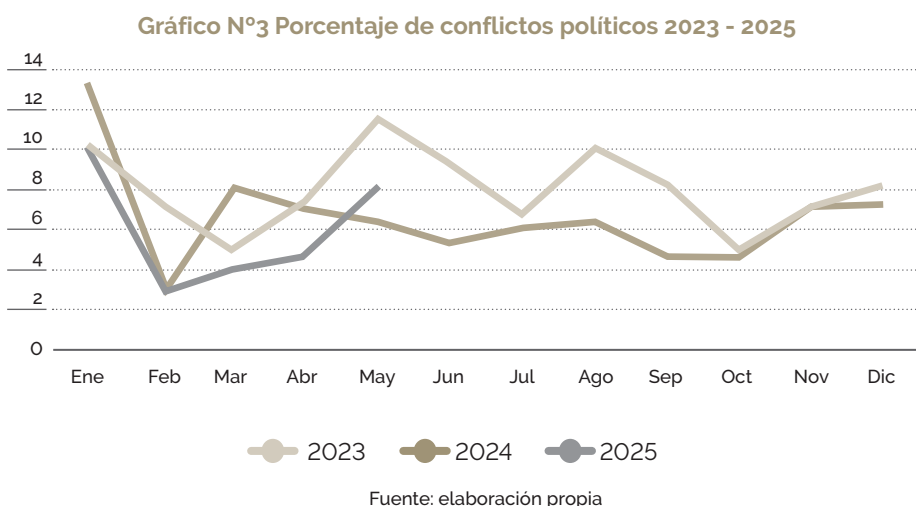
generado división interna y debilitamiento del partido, sino que ha desorganizado el campo político nacional.

"No hemos perdido toda la esperanza, pero estamos frente a una frágil institucionalidad política que actúa de manera insuficiente."¹¹⁴

Esta fragilidad ha generado una percepción extendida de ausencia de reglas compartidas, arbitrariedad y desprotección, que empuja a diversos actores sociales a recurrir a la movilización directa ante la inexistencia de otras vías.

"No hay confianza en ninguno de los elementos que nos permiten vivir en sociedad."¹¹⁵

A pesar de una leve disminución progresiva que el promedio mensual de conflictos políticos ha experimentado: 7,9% en 2023, 6,4% en 2024 y 5,8% en los cuatro primeros meses de 2025, no se ha producido un descenso de la tensión, al contrario, lo que se observa es una transformación en la forma que asume la conflictividad: de la marcha y bloqueo carretero hacia expresiones más sutiles y complejas, como la disputa jurídica, la guerra de narrativas o desinformación y la captura institucional, trasladándose la contienda política a nuevos terrenos: los estrados judiciales, los mecanismos de designación de autoridades, la pugna por la legalidad partidaria y las redes sociales.



114 Cecilia Requena, entrevista.

115 Pedro Badram, entrevista.

Todo indica que Bolivia atraviesa un ciclo de conflictividad caracterizado por una multiplicación de causas estructurales interrelacionada que ya no operan por separado, sino que se entrelazan en un entramado de tensiones que reconfigura el campo político.

"Varias líneas de conflicto que se iban desarrollando desde hace años van a agudizarse; el clima preelectoral está cerrando las puertas a cualquier intento de despolarización."¹¹⁶

Este panorama de conflictividad múltiple y constante no sólo es expresión del desgaste de un ciclo político, sino que abre interrogantes sobre la capacidad del sistema para generar una salida democrática legítima. Lo que está en disputa es quién ejercerá el poder y en qué condiciones lo hará, con qué reglas y con qué respaldo institucional.

El mapa presenta una visualización territorial de los municipios y registra los conflictos políticos ocurridos en Bolivia entre los años 2023 y 2025, clasificados según la cantidad de tipos de conflicto presentes en cada uno. Los colores representan una escala de intensidad basada en la diversidad de temas de conflicto identificados: desde municipios marcados en morado oscuro, donde se registró un tipo único de conflicto político, hasta municipios en amarillo que acumulan seis tipos distintos.

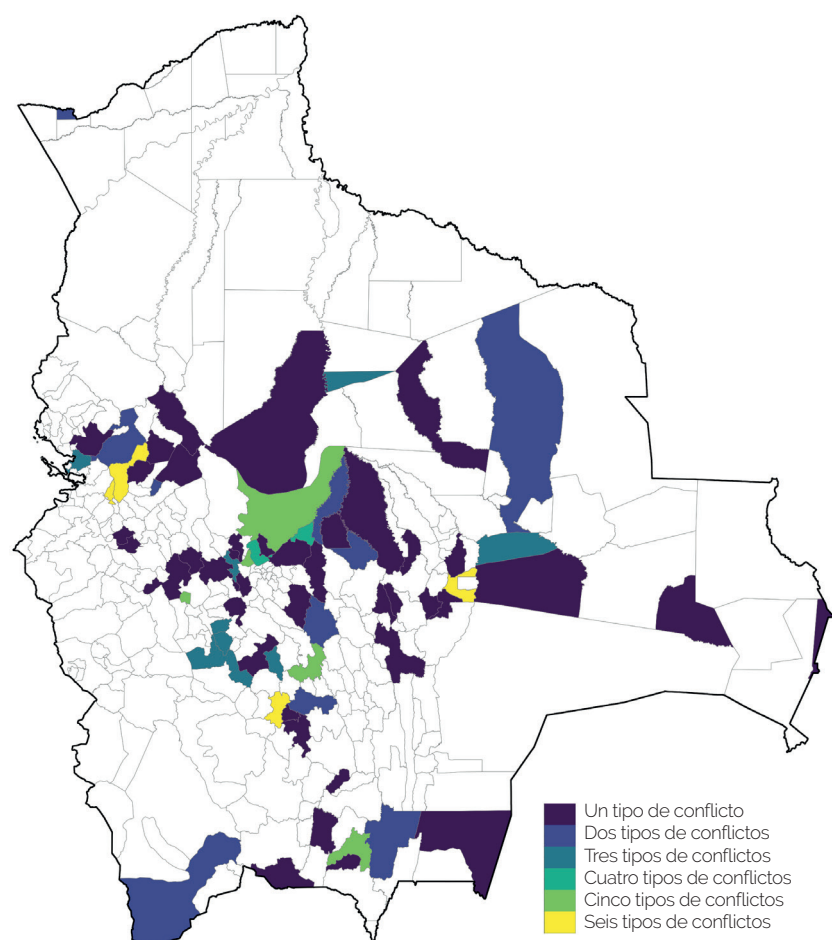
Esta representación permite observar cómo algunos territorios –zonas del Trópico de Cochabamba, norte de Potosí, áreas del altiplano paceño y la ciudad de El Alto– concentran una mayor complejidad y transversalidad en sus dinámicas de movilización, albergando conflictos ligados a disputas por liderazgo, judicialización de la política, crisis económica, desconfianza electoral, parálisis institucional y crisis de representación. En ese sentido resulta llamativo que regiones como el Trópico de Cochabamba y el norte de Potosí –territorios con estructuras organizativas consolidadas, donde el evismo conserva una base social fuerte– se encuentren entre los municipios con mayor cantidad de campos de conflicto activados, lo cual sugiere que en dichas zonas se expresan tanto tensiones locales, como disputas de carácter nacional, especialmente aquellas vinculadas con la pugna por el liderazgo del MAS y la búsqueda de reposicionar a Morales y forzar su candidatura.

La distribución geográfica evidencia que la conflictividad política no es homogénea, sino que se expresa de manera diferenciada según la densidad organizativa, el peso político local y el grado de involucramiento de actores nacionales en las disputas territoriales. Este patrón refuerza la idea de que ciertos municipios se convierten en escenarios clave de la disputa por el poder, actuando como puntos

116 Vladimir Torrez, entrevista.

nodales desde los cuales se articulan movilizaciones con capacidad de impacto nacional.

Mapa N°1 Campos de conflicto según municipio



Fuente: elaboración propia

II.2.2 PRINCIPALES CAMPOS DE CONFLICTIVIDAD

De acuerdo a la naturaleza de las demandas planteadas en los conflictos políticos, éstos se han organizado en seis campos: judicialización de la política (17% del total de casos políticos), crisis interna del MAS y disputa por el liderazgo (32%), crisis de representación política (16%), crisis económica como catalizador de la conflictividad política (12%), parálisis institucional y virtual crisis de gobernabilidad (12%) y desconfianza electoral (11%).

II.2.2.1 Judicialización de la política

Uno de los aspectos más relevantes de la conflictividad política en Bolivia durante el periodo 2023 – 2025 es la consolidación del uso de la justicia como recurso en la disputa por el poder. Esta tendencia, si bien no es nueva, ha adquirido una intensidad inusitada en el actual ciclo político al punto de convertirse en un mecanismo estructural de confrontación, utilizado tanto por sectores oficialistas como opositores. En este contexto, el Órgano Judicial deja de ser garante de legalidad para convertirse en actor central del conflicto.

"El órgano judicial ya es un actor político más desde hace bastante tiempo... ahora de manera más frontal, más abierta, de cara al país... pueden trabar las elecciones, postergarlas, realmente mover todo lo que está ocurriendo en el país."¹¹⁷

Durante el período analizado, los conflictos vinculados a procesos judiciales y disputas legales de carácter político representaron 17% del total. Su relevancia no radica en la cantidad, sino en el alto impacto que generan sobre la estabilidad institucional, la legitimidad de los actores y la organización del proceso electoral. Estos casos se caracterizan por una conflictividad de baja intensidad, pero con alta carga simbólica, en los cuales la disputa gira en torno al control del aparato judicial para la definición de candidaturas, la habilitación o inhabilitación de dirigentes y el uso del derecho penal con fines políticos.

"En el fondo el conflicto de fondo en Bolivia es por el control de las instituciones, y eso ha judicializado la política: cada actor busca controlar el Tribunal, la Fiscalía, el Órgano Electoral."¹¹⁸

Los actores movilizados son diversos, predominan organizaciones sociales afines al MAS (en sus diferentes facciones), colectivos ciudadanos, plataformas de derechos humanos y entidades gremiales, como el Colegio de Abogados. A diferencia de otros campos de conflicto, los del ámbito judicial suelen ser protagonizados por actores que cuentan con estructuras organizativas definidas. Las demandas más frecuentes incluyen el cese de persecución judicial a líderes políticos, la anulación de procesos penales considerados arbitrarios y la impugnación de decisiones judiciales que afectan la competencia electoral.

Entre los casos más representativos se encuentra el conflicto de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que en enero y noviembre de 2024,

¹¹⁷ Raykha Flores, entrevista.

¹¹⁸ Luciana Jáuregui, entrevista.

así como en marzo y mayo/junio de 2025, organizaron movilizaciones para denunciar una presunta persecución judicial contra Morales. Las medidas incluyeron vigiliadas, concentraciones, marchas y bloqueos de caminos, muchas de ellas con alta capacidad de afectación territorial y acompañadas de episodios de violencia significativa, tanto en las rutas como en los intentos de ingreso a sedes institucionales. Es necesario mencionar que en este conflicto el sistema judicial actuó de manera instrumental en la confrontación entre las facciones.

Otro conflicto interesante es la protesta del Colegio de Abogados de Santa Cruz junto a vecinos autoconvocados en defensa del activista Jorge Valda, detenido por supuestos delitos de terrorismo y encubrimiento; el caso, calificado como persecución política, dio lugar a concentraciones en Santa Cruz y La Paz. Este tipo de conflictos muestra cómo la judicialización atraviesa todo el espectro político, utilizando a conveniencia el discurso de persecución política como resguardo y ataque, lo cual no significa que ésta no exista en el país.

Si bien el repertorio de movilización en este campo se basa en medidas de presión de baja y mediana intensidad —declaraciones de emergencia, vigiliadas, marchas, huelgas de hambre y tomas simbólicas de instituciones—, lo característico es que esas acciones suelen ir acompañadas por la presentación de recursos legales ante instancias judiciales. La interposición de amparos, acciones de inconstitucionalidad o peticiones de revisión se ha vuelto una práctica común en disputas políticas que se trasladan estratégicamente al terreno jurídico.

En el plano institucional, destaca el papel del TCP, que ha sido escenario de múltiples demandas por parte de actores que buscan revertir decisiones del TSE o exigir habilitación electoral. Es el caso de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia (Conniob) y de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), organizaciones indígenas que presentaron acciones para ser reconocidas como actores políticos habilitados a presentar candidaturas propias, cuestionando las restricciones impuestas por la Ley de Organizaciones Políticas. Estas acciones, que en mayo de 2025 se encontraban en trámite, muestran cómo el campo judicial se ha convertido en un espacio de disputa por la representación política.

Desde el punto de vista territorial, estos conflictos se concentran principalmente en las ciudades capitales, especialmente en La Paz, Sucre y Santa Cruz, donde se encuentran las sedes de los principales órganos judiciales; esa concentración geográfica refuerza el carácter institucional de esta conflictividad.

A nivel discursivo, estos casos hacen referencia tanto al tema de la persecución política —sea cierta o no— como a la crisis de legitimidad del sistema judicial, con el efecto de desincentivar el uso de canales institucionales, favoreciendo la escalada de los conflictos.

"La justicia es percibida como un arma, no como un árbitro."¹¹⁹

En suma, la judicialización de la política es una problemática estratégica que altera profundamente las reglas del sistema democrático, debilita la credibilidad de las instituciones y contribuye al clima de confrontación permanente, en el cual se producen conflictos no muy numerosos, pero significativos en cuanto a su impacto. En ese marco, la ley no es vista ya como un instrumento generador de equilibrio, sino como un terreno más de disputa.

II.2.2.2 Crisis interna del MAS y disputa por el liderazgo

La crisis interna del MAS constituye uno de los ejes centrales de la conflictividad política entre 2023 y 2025. A diferencia de los años previos, cuando las tensiones en el oficialismo se resolvían mediante mecanismos orgánicos disciplinarios y de otro tipo, el periodo actual está marcado por una confrontación abierta y sostenida entre las facciones lideradas por Morales y Arce, que ha generado múltiples conflictos sociales.

"Hoy ya no hay una dirección política que articule a las organizaciones sociales con el Gobierno y con el instrumento político... el MAS está sin columna vertebral, sin dirección política."¹²⁰

La disputa por el liderazgo del MAS ha tenido un efecto expansivo en el sistema político, fragmentando alianzas, paralizando el aparato legislativo, tensionando las relaciones con organizaciones sociales y trasladando el conflicto del ámbito partidario a los órganos del Estado, sedes sindicales, bases territoriales y a las calles.

"La fractura Evo - Arce ha convertido al MAS en un campo de guerra; ya no es partido, es trinchera."¹²¹

Los conflictos en este campo son protagonizados por actores afines a una u otra facción del MAS, incluyendo organizaciones sociales aliadas, como la Csutcb, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, otras agrupaciones campesinas y algunas indígenas, como el ayllu Puraka y comunidades guaraníes, además de vecinales. A estos actores se suman las dirigencias nacional y regional del MAS, así

119 Erika Brockmann, entrevista.

120 Fernando Mayorga, entrevista.

121 Sergio de la Zerda, entrevista.

como algunos grupos autoconvocados, que denuncian la distorsión del proyecto político original.

Entre sus principales demandas se encuentran el reconocimiento del liderazgo “legítimo” del partido, el cese de la supuesta persecución judicial contra Morales y sus allegados, el cese de la instrumentalización del poder estatal para contrarrestar al oponente y el mantenimiento en su poder de sedes organizacionales controladas por la otra facción. Estas demandas han sido planteadas mediante declaraciones públicas de ruptura, marchas, bloqueos carreteros y tomas de instalaciones.

Uno de los hitos de esta conflictividad es la marcha de sectores evistas en enero de 2025 a fin de posicionar a Evo Morales como víctima de persecución estatal y proyectar su liderazgo político en el contexto de creciente disputa interna; la columna que marchó de Patatamaya a La Paz intentó ingresar a la plaza Murillo, generándose enfrentamientos con la policía, aunque posteriormente se instaló una vigilia. Este conflicto desencadenó una serie de reacciones en distintos niveles: se registró una emboscada a un contingente policial en la carretera Challapata Pazña por parte de sectores movilizadores, hubo múltiples detenciones y surgieron varios contraconflictos promovidos por actores sociales en rechazo a las movilizaciones lideradas por Morales.

Entre los conflictos por el control de oficinas de organizaciones afines se encuentra el violento enfrentamiento entre sectores afines a Arce y a Morales por la sede de Fsutcc; otro caso semejante es el conflicto por el control de la sede del MAS en la zona de Miraflores, La Paz. En marzo de 2025, personas afines al Gobierno tomaron el inmueble, lo que fue respondido con una toma violenta por parte del ala evista. Ante la falta de arbitraje institucional, este tipo de disputas se resuelve –transitoriamente– mediante la imposición de la fuerza física, sumándose esto a los muy malos precedentes que existen en ese sentido.

Estas pugnas son muestra de la creciente beligerancia de la disputa interna que rebasó lo discursivo y ha llegado al enfrentamiento físico violento y evidencian que la institucionalidad orgánica del MAS –que durante años gestionó orgánicamente sus conflictos internos– ha colapsado, dejando las tensiones internas sin canales formales de atención.

“Mucha gente le ha reprochado a Luis Arce no ocuparse de gobernar en vez de apuntalar su candidatura... el oficialismo ha ganado protagonismo respecto a la oposición, pero por su disputa interna”¹²²

La disputa del MAS ha tenido efectos sobre la estructura orgánica del Pacto de Unidad, otrora base de sustentación del partido. En varios casos ha generado

122 Raykha Flores, entrevista.

una doble dirigencia, con sectores que responden al gobierno de Arce y otros que mantienen leales a Morales, lo cual ha debilitado la capacidad de interlocución con estas organizaciones y ha generado una crisis de representatividad con relación a sus bases.

En términos de formas de movilización, este campo presenta una amplia variedad de repertorios, desde declaraciones de estado de emergencia hasta marchas prolongadas, concentraciones, bloqueos de carreteras en varios departamentos, tomas de instituciones y enfrentamientos. Se han registrado al menos 5 tomas de instalaciones, más de 50 bloqueos y 3 marchas masivas, lo que evidencia una capacidad significativa de articulación territorial por parte principalmente de sectores afines a Morales.

Desde el punto de vista geográfico, la conflictividad en este campo se ha extendido a todo el país, aunque su presencia es mayor en zonas cocaleras, algunas ciudades intermedias como Warnes, Concepción y Uncía, y áreas controladas por las organizaciones afines. En varias regiones se han producido conflictos paralelos por el control de alcaldías, juntas vecinales y otras organizaciones sociales.

A nivel discursivo, la disputa por el liderazgo del MAS se enmarca en una narrativa de “recuperación del instrumento político” frente a su supuesta desviación o traición.

“El MAS sigue siendo fuerte en presencia, pero ha perdido el alma.”¹²³

Este conflicto ha generado la percepción extendida de que el partido ha dejado de representar un proyecto coherente y se ha convertido en un campo de disputa faccional sin horizonte programático. La ruptura también ha tenido consecuencias en el ámbito electoral, las facciones enfrentadas compiten por controlar el registro de militantes, la inscripción de candidatos y la postulación presidencial; este escenario de conflicto de alta intensidad podría dar lugar a diversas impugnaciones, alejando la posibilidad de acuerdos mínimos.

En síntesis, la crisis interna del MAS ha rebasado ese ámbito para convertirse en un factor estructural de la conflictividad política, desorganizando el sistema de representación, debilitando las capacidades del Estado, erosionando las estructuras sociales y fragmentando aún más el campo político.

II.2.2.3 Crisis de representación

Una de las dimensiones transversales y más persistentes del actual ciclo de conflictividad política en Bolivia es la de crisis de representación que se manifiesta tanto en el debilitamiento de los actores políticos tradicionales, como en la pérdida de legitimidad de organizaciones sociales históricamente articuladoras de demandas.

123 Centa Rek, entrevista.

Se trata de un fenómeno que atraviesa el sistema político en su conjunto: los partidos ya no representan a sus bases, las organizaciones sociales están fragmentadas y cooptadas y los liderazgos no logran articularse en estructuras institucionales.

“Los representantes políticos no escuchan, no están conectados con la gente. La ciudadanía está huérfana de voz institucional.”¹²⁴

Si bien la cantidad de estos casos no es muy alta, su influencia se extiende a otros campos, actuando como factor latente en disputas políticas y enfrentamientos sectoriales. Este tipo de conflicto se expresa especialmente a través de pugnas internas por el control de representaciones sociales, impugnaciones a dirigencias sociales (sindicales o vecinales), y cuestionamientos a procesos de elección o designación de autoridades.

Uno de los casos más visibles es el conflicto entre facciones de Fsutcc, en el cual afines a Morales y a Arce se enfrentaron por el control de su sede, desencadenando enfrentamientos físicos, que concluyeron con detenciones. Este conflicto no sólo pone en evidencia la ruptura de la unidad al interior del movimiento campesino, sino también el vaciamiento de legitimidad de las dirigencias sindicales como canales de representación de intereses colectivos.

Situaciones similares se presentan en el caso de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, cuya dirigencia fue desconocida por el sector afín al Gobierno; el conflicto gira en torno a la legitimidad de la representación sindical, al control de la sede y de recursos, y a la disputa de línea política, evidenciando cómo la fragmentación interna de organizaciones sociales debilita su rol de interlocución con el Estado.

El conflicto entre la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Oruro y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia es expresivo de los problemas actuales de representatividad social y autonomía de las bases organizadas. El desconocimiento del congreso departamental fue interpretado por las bases como una imposición política, motivando declaraciones de emergencia, denuncias de cooptación y movilizaciones.

En este tipo de conflictos aparecen también actores emergentes sin estructuras formales, como colectivos ciudadanos y agrupaciones locales, que se movilizan canalizando el malestar territorial y sectorial, pero sin una articulación clara ni vocerías reconocidas, lo que limita la eficacia de su accionar.

En términos de repertorio de presión, estos conflictos hacen uso de declaraciones de desconocimiento de dirigencias, amenazas de ruptura organizativa, concentraciones, vigiliadas y de la toma de instituciones. En algunos casos, las protestas se transforman en gestiones legales y administrativas para bloquear la acción de

124 Viviana Mariscal, entrevista.

dirigencias rivales, lo que da lugar a una judicialización interna de las organizaciones y en otros, deriva en la adopción de medidas de fuerza o presión callejera.

Es evidente que la descomposición de los mecanismos tradicionales de representación también se refleja en el ámbito político institucional.

“La política se volvió una guerra de trincheras sin puentes posibles.”¹²⁵

Esta afirmación expresa la lógica de clausura que atraviesa a los partidos políticos, cerrados en sí mismos, incapaces de dialogar, de renovar sus estructuras y de incorporar nuevos liderazgos, han dejado de funcionar como espacios de canalización y agregación de demandas.

Así, en el contexto electoral se han desarrollado movilizaciones de organizaciones de la sociedad civil interpelando a los partidos políticos y demandándoles actuar de una manera distinta, como ocurrió en abril de 2025 cuando el colectivo Ríos de Pie cuestionó el personalismo, la dispersión y la falta de visión común y planteó a los precandidatos de oposición construir una candidatura única. A este caso se sumó la acción del Colectivo Ciudadano por la Democracia conformado por vecinos de Sucre, que en mayo realizaron una concentración para exigir que las fuerzas políticas incluyan mecanismos de consulta ciudadana en la elección de sus candidaturas. Estas movilizaciones expresan tanto el desencanto creciente ante la actuación de las organizaciones políticas como la determinación de incidir en el escenario electoral con lógica nueva.

Desde una perspectiva territorial, los conflictos de este campo tienen una presencia significativa en ciudades intermedias y zonas rurales, donde las organizaciones sociales tradicionales han sido erosionadas por la disputa política. Los centros urbanos concentran actores emergentes con demandas no canalizadas a través de los canales partidarios u organizacionales clásicos; se trata de colectivos ciudadanos o grupos vecinales autoconvocados –como los vecinos del distrito 14 de Potosí que se movilaron exigiendo la destitución del subalcalde al que acusan de favorecer a un sector afín al MAS, generando la percepción de uso partidario de la gestión municipal– que se movilizan a partir de estructuras flexibles y sin una representación orgánica definida. Esta configuración ocasiona la fragmentación del mapa de actores, conviviendo organizaciones tradicionales en crisis con colectivos nuevos que aún deben ganar legitimidad institucional.

La crisis de representación no solo debilita la gobernabilidad, sino que también reduce la capacidad del sistema democrático para regenerarse, abriendo espacio a expresiones autoritarias, abstencionismo o conflictos de difícil canalización.

125 Patricia Paputsakis, entrevista.

II.2.2.4 Crisis económica como catalizador de la conflictividad política

La crisis económica ha operado como un factor transversal que amplifica y complejiza la conflictividad política en Bolivia. Si bien no todos los conflictos tienen un origen estrictamente económico, lo cierto es que las dificultades estructurales del modelo económico —como el agotamiento de la renta gasífera, la escasez de divisas y combustible, el alza en el costo de vida y la pérdida de reservas— se han convertido en elementos desencadenantes o amplificadores de múltiples protestas. En este sentido, la economía actúa como catalizador: acelera, interconecta y exacerba las tensiones sociales y políticas existentes.

"La economía no es sólo una crisis, es el campo donde se legitima o se desgasta el poder político. Hoy el Gobierno está perdiendo ambos frentes."¹²⁶

Los casos vinculados a temas económico políticos, es decir aquellos que plantean junto a la demanda económica, una crítica de carácter político (a la gestión gubernamental, al modelo económico del MAS) representan un porcentaje menor de los conflictos políticos, sin embargo son muy notorios por la actual sensibilidad de la población hacia el tema y porque las medidas de presión utilizadas son de alta intensidad (concentran el mayor uso proporcional del bloqueo carretero), por lo cual son particularmente disruptivos de la cotidianeidad del país.

Aunque esta conflictividad es significativa no guarda correlación con la gravedad de la situación económica de la población y del país en su conjunto, es probable que la ciudadanía haya decidido esperar a la realización de las elecciones nacionales para que el nuevo gobierno tome las medidas necesarias, lo cual ha reducido la cantidad de protestas.

"Nadie se anima a asumir medidas de acción colectiva fuertes, prolongadas, tratando de evitar justamente que se destruya el bien común, que parecer ser en este momento las elecciones."¹²⁷

Otra explicación puede ser la sugerente hipótesis planteada por el analista Andrés Gómez¹²⁸: probablemente se esté ingresando en un proceso de despolitización debido a que se ha llegado a una situación límite que hace que la gente

126 Luciana Jauregui, entrevista.

127 George Komadina, entrevista.

128 Andrés Gómez, entrevista.

opte por ocuparse de sus asuntos, dejando de lado los problemas generales y la movilización social.

Los actores movilizados son diversos y no responden a una sola lógica organizativa, forman parte de juntas vecinales, organizaciones gremiales, campesinas y plataformas ciudadanas. Esta heterogeneidad es muestra de que la crisis económica afecta a una variedad de sectores, con distintos tipos de organización, capital político y capacidad de presión.

Si bien estas demandas se formulan en clave económica: freno al alza de precios de productos básicos y de tarifas de transporte público, aprobación de créditos internacionales y de presupuesto para obras públicas, y es frecuente que los actores movilizados respalden sus demandas económicas con discursos sobre la precarización económica, la desigualdad en la distribución de recursos y derechos sociales, estas movilizaciones no pueden entenderse exclusivamente como expresiones de malestar económico ya que, en la mayoría de los casos, interpelan directamente al Gobierno y al Legislativo, señalando su incapacidad para responder ante el deterioro de las condiciones de vida, lo que convierte al conflicto económico en un mecanismo de la disputa política. Hay que considerar, además, que de manera creciente se percibe que las decisiones económicas están atravesadas por intereses políticos, lo cual intensifica el malestar social.

Un ejemplo representativo es el conflicto protagonizado por vecinos del distrito 9 de Cochabamba, quienes se movilizaron en enero de 2025 exigiendo la abrogación de una ley municipal que autorizaba el incremento de tarifas de transporte público. Las acciones incluyeron marchas, bloqueos y una vigilia en la plaza 14 de Septiembre. Aunque se trataba de una demanda local puntual, conectó con el malestar generalizado por el incremento del costo de vida y con la percepción de la gente sobre la priorización de los intereses políticos y corporativos por encima de las necesidades sociales.

"La situación económica se ha vuelto insostenible para muchos sectores, y eso ya no se expresa sólo en reclamos salariales, sino en cuestionamientos a todo el modelo de gestión."¹²⁹

Otro caso destacable es el de la Csutcb afín al Gobierno, que en enero de 2025 demandó a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de créditos internacionales pendientes, advirtiendo que la inacción legislativa obstaculiza la respuesta del Ejecutivo a la crisis económica. En este conflicto se combinó una dimensión institucional —bloqueo legislativo— con una demanda social, lo que evidencia cómo lo económico se entrelaza con otros campos de conflicto.

129 Gastón Zerzasky,

Si bien muchos de los conflictos inscritos en este campo responden a demandas legítimas vinculadas a la problemática económica y sus efectos sobre la calidad de vida, éstas son utilizadas por actores políticos que capitalizan el malestar social, particularmente en un contexto preelectoral. En varios casos, sectores que se presentan como defensores de los intereses populares articulan movilizaciones en torno a la crisis económica con una intencionalidad política que excede el reclamo inicial. Es ilustrativo el conflicto protagonizado por organizaciones sociales afines a Evo Morales, que en enero de 2025 impulsaron una marcha de Patacamaya a La Paz y un bloqueo de caminos bajo el argumento de la crisis económica y la persecución judicial, aunque el móvil real expuesto en las consignas y discursos públicos que acompañaron la movilización era la reposición de la figura del expresidente en la agenda nacional y su habilitación como candidato en las elecciones generales.

Este patrón se repitió con mayor intensidad en los bloqueos carreteros organizados por los mismos sectores en noviembre de 2024, mayo y junio de 2025, que se extendieron por varios días y afectaron áreas estratégicas del país. Aunque se presentaron públicamente como una defensa de la economía popular y un rechazo a la gestión económica del gobierno de Arce, su objetivo era presionar al TSE a habilitar a Morales como candidato presidencial. Estas movilizaciones, especialmente la última, tuvieron un carácter abiertamente confrontacional con múltiples episodios de violencia que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas del orden, dejando varias personas muertas y numerosos heridos. La instrumentalización de las narrativas económicas en la disputa de poder del MAS socava la legitimidad de las demandas sociales y agravando la fragmentación política del país.

Los repertorios de presión de esta conflictividad incluyen marchas, huelgas, vigiliadas, bloqueos de caminos y amenazas de toma de instituciones. Aunque la protesta se expresa principalmente mediante esas medidas, hay casos en los que las demandas se canalizan mediante petitorios formales, como ocurrió con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, que en 2025 presentó un pliego petitorio al Gobierno exigiendo atención a una serie de demandas, como el acceso a insumos, créditos, mejores condiciones normativas para su sector y dotación normal de combustible. El bloqueo carretero –medida de presión de alta radicalidad y la más utilizada en este campo de conflicto, muy por encima de su uso en los otros campos de conflictividad política– no debe interpretarse solamente como una táctica de presión, sino también como un indicador de la centralidad y urgencia de las demandas planteadas.

Si bien es evidente el uso político de las demandas económicas, es necesario señalar que para muchos sectores movilizadas, especialmente los más precarizados, estas protestas responden tanto a estrategias políticas como a la necesidad de defender condiciones mínimas de subsistencia. En ese sentido, la apelación a medidas de presión de alta radicalidad es una manera de asegurar la visibilidad del

caso y aumentar las probabilidades de que sus demandas sean atendidas, en un contexto en el cual los canales institucionales se perciben como distantes, lentos, inaccesibles o indiferentes.

Una característica clave de estos conflictos es su carácter territorial; a diferencia de los conflictos institucionales, que se concentran en las ciudades capitales, los conflictos económico políticos emergen en municipios intermedios, zonas periurbanas y áreas rurales, lo cual amplía el mapa de la conflictividad –que suele concentrarse en el ámbito urbano y en las ciudades capitales–, poniendo en evidencia el amplio impacto de la crisis económica, con efectos concretos sobre el abastecimiento de productos básicos, especialmente alimentos, y servicios como el transporte, los precios y la provisión de servicios públicos.

Desde el punto de vista estructural, varios entrevistados coinciden en señalar que los conflictos actuales evidencian la fragilidad del modelo económico vigente, incapaz de generar los excedentes necesarios para sostener el pacto social o contener el malestar mediante políticas redistributivas. Esta situación, combinada con la ausencia de respuestas institucionales eficaces, abre la posibilidad de una mayor radicalización de la protesta y su articulación con conflictos por otras problemáticas, como la desconfianza institucional, la crisis de representación y la disputa partidaria. Más que reacciones coyunturales, se trata de la emergencia del malestar acumulado de la ciudadanía que percibe que el Estado ha perdido capacidad de respuesta y legitimidad.

"El modelo basado en la renta gasífera se ha agotado, pero no hay una estrategia de transición ni un nuevo contrato económico que establezca el sistema."¹³⁰

Así, la crisis económica opera como un elemento estructurante de la conflictividad que no sólo genera demandas concretas inmediatas, sino que también es expresión de la sensación generalizada de desánimo, incertidumbre y falta de horizonte. Si no se logra dar respuesta a las demandas, no se recupera institucionalidad para hacerlo y no se brinda contención territorial, la conflictividad económica puede transformarse en un factor muy importante de desestabilización política.

II.2.2.5 Parálisis institucional y virtual crisis de gobernabilidad

En los últimos tres años, el país ha enfrentado una parálisis progresiva del aparato estatal, expresada en el bloqueo del Legislativo, el desgaste y limitación de la capacidad de acción del Ejecutivo y en la reducción del campo de acción de los gobiernos subnacionales. Esta situación ha generado una virtual crisis de gobernabilidad que no se manifiesta únicamente como imposibilidad operativa, sino también como

130 Gaston Zerastsky

erosión de la legitimidad institucional. La pérdida de eficacia simbólica —entendida como la capacidad de las instituciones para sostener la cohesión del sistema político y generar confianza pública— se refleja claramente en los últimos datos del estudio Delphi ya mencionados en capítulos anteriores, que muestran una desconfianza generalizada hacia las principales instituciones del Estado, incluyendo el Gobierno, el Legislativo, el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y, en menor medida, el Tribunal Supremo Electoral. Estos datos ilustran cómo la crisis institucional no se expresa solamente en el funcionamiento técnico del Estado, sino que también afecta su legitimidad democrática.

En esta situación crítica, ni el oficialismo ni la oposición pueden articular mayorías estables ni acuerdos funcionales para sostener la gobernabilidad. Lejos de ser un simple estancamiento legislativo, puede hablarse de una crisis de ejercicio del poder, donde las reglas formales siguen vigentes, pero las capacidades reales de gestión están profundamente erosionadas.

"Todo el sistema está bloqueado y eso genera una ansiedad social muy peligrosa."¹³¹

"Nos enfrentamos a un vacío de poder más que a una transición."¹³²

La conflictividad por esta problemática no siempre se expresa como interpe-lación directa al Gobierno o al Legislativo; con frecuencia, las demandas no procesadas institucionalmente derivan en protestas como principal vía de presión. La inacción de la Asamblea Legislativa por los vetos cruzados entre bancadas, la ausencia de acuerdos mínimos sobre cuestiones clave y la imposibilidad de articular una agenda efectiva se ha convertido en una situación crónica.

"Nada garantiza que quien gane pueda ejercer efectivamente el poder", una frase que resume el estado de disfuncionalidad institucional.¹³³

Las movilizaciones en demanda de acción estatal, ante el bloqueo resultante de las disputas entre órganos, se sitúan mayormente en el ámbito institucional y frecuentemente son detonadas por la ausencia de respuestas.

Un caso ilustrativo sobre los efectos de la parálisis institucional es el impulsado en 2024 por el Comité Cívico Potosinista, denunciando el incumplimiento

131 Ana Lucía Gavarreque, entrevista.

132 Santiago Terceros, entrevista.

133 Fernando Mayorga, entrevista.

de compromisos asumidos por el Gobierno y la Asamblea Legislativa para la realización de proyectos de inversión en ese departamento. La entidad cívica atribuyó el estancamiento a la incapacidad estatal para coordinar acciones entre niveles de gobierno, exigiendo soluciones inmediatas. De forma similar, en 2025 diputados del ala arcista del MAS acusaron a su propia bancada y a la oposición de bloquear sistemáticamente la agenda legislativa, generando una crisis funcional en la Asamblea. Estos casos, sumados a las movilizaciones de la Cstucb ese mismo año en demanda de aprobación de créditos internacionales, muestran cómo el bloqueo político y la debilidad institucional que impiden el desarrollo de políticas públicas, activan respuestas cada vez más confrontacionales de las organizaciones sociales y de actores políticos que perciben al Estado como un espacio trabado e inoperante.

En términos de repertorio, estos conflictos presentan una amplia gama de medidas de presión, que van desde declaraciones de emergencia y amenazas de movilización hasta la toma de instalaciones y la interrupción de actividades públicas; las declaraciones referidas al bloqueo legislativo, la falta de coordinación intergubernamental y la imposibilidad de ejecutar proyectos son una constante en los discursos de los actores movilizados. La acción directa es un sustituto de la gestión política en un contexto en que los espacios de negociación son percibidos como inoperantes o están cerrados.

Desde una perspectiva territorial, esta crisis de gobernabilidad no se expresa únicamente en la sede de gobierno, sino que alcanza los niveles subnacionales, donde la parálisis institucional se reproduce alimentada por disputas partidarias que no tienen resolución legal ni administrativa. Es el caso del municipio de Quillacollo, donde vecinos denunciaron la suspensión del alcalde como resultado de la pugna entre facciones del MAS, lo que derivó en la toma de la alcaldía, paralizando sus actividades, y la instalación de una vigilia.

Como parte de la crisis, la capacidad estatal para responder a demandas sociales y gestionar los conflictos se ha debilitado, aumentando la frustración ciudadana y alimentando la confrontación directa, mediante la cual los actores sociales reemplazan al Estado como canalizador del conflicto. El deterioro de la gobernabilidad incrementa el riesgo de escalamiento de la conflictividad en el marco de un proceso electoral carente de acuerdos mínimos.

II.2.2.6 Desconfianza electoral

En los últimos años, especialmente desde la crisis de 2019, la desconfianza en la institucionalidad electoral es una dimensión de la conflictividad política que no puede dejarse de lado. Si bien los cuestionamientos al TSE o a los tribunales departamentales no son muy frecuentes, su impacto es estratégico ya que afecta la legitimidad del proceso democrático y la posibilidad de un desenlace electoral aceptado y pacífico.

"No se cree en los partidos, no se cree en el sistema electoral, no se cree en el órgano judicial... la gente está como sin suelo institucional."¹³⁴

Los conflictos incluidos en este campo tienen como elemento común el cuestionamiento a la imparcialidad, transparencia y legalidad del proceso electoral. Se expresan mediante denuncias por la falta de garantías para la participación, impugnaciones a las nuevas circunscripciones electorales, observaciones a decisiones sobre habilitación o inhabilitación de candidaturas y críticas a la composición y/o actuación del Órgano Electoral en sus distintas instancias.

Las movilizaciones vinculadas con temas electorales no esperaron a la convocatoria formal a elecciones para manifestarse; desde el inicio de la etapa preparatoria del proceso electoral del presente año, distintas organizaciones sociales comenzaron a cuestionar la legitimidad de las decisiones del TSE, especialmente en torno al reconocimiento de congresos partidarios y a la definición de siglas.

Uno de los episodios emblemáticos fue la protesta de sectores afines a Morales (Csutcb, las seis federaciones del trópico de Cochabamba y parte del Pacto de Unidad) por la anulación del X Congreso del MAS en Lauca Ñ, denunciando una supuesta persecución política y acusando al TSE de actuar en coordinación con el gobierno de Arce para impedir la habilitación de Morales como candidato presidencial.

Otro actor muy cuestionado fue el Órgano Judicial por los fallos que emitió limitando la inscripción de candidaturas de otras fuerzas políticas, como el Movimiento Tercer Sistema, lo cual fue interpretado por Fencomin y los "Ponchos Rojos" como un atentado contra el pluralismo democrático. Estas disputas son un indicador del clima de desconfianza hacia las instituciones, en el cual las decisiones administrativas y jurídicas son vistas como maniobras políticas, convirtiendo a la batalla por el control de las reglas del juego electoral en uno de los ejes centrales de la conflictividad política.

Esta conflictividad involucra a una gama de diversos actores: organizaciones sociales, comités cívicos, legisladores departamentales, colectivos indígenas y plataformas ciudadanas, además de organizaciones políticas. En algunos casos se trata de sectores que se sienten excluidos del sistema político y denuncian una persistente subrepresentación; en otros casos son actores con representación formal que perciben que las decisiones adoptadas, tanto por el Órgano Electoral, como por el Órgano Judicial no responden a criterios técnicos, sino políticos.

Un conflicto representativo es la movilización impulsada en abril de 2025 por la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca junto al Comité Cívico y al *Comité Impulso para el Desarrollo de Provincias de Chuquisaca* rechazando la de-

limitación de circunscripciones electorales efectuada por el TSE; denunciaron que el nuevo ordenamiento rompe la representación institucional de mancomunidades y provincias, carece de criterios técnicos claros y no fue debidamente consultado y reclamaron una revisión de la cartografía electoral, reclamo replicado en otras regiones del país.

Destaca también el caso del senador Santiago Ticona (Comunidad Ciudadana), quien en enero de 2025 instaló una huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional exigiendo la abrogación de la Ley de distribución de escaños entre departamentos con el argumento de que perjudica a su región, Chuquisaca, y consolida una representación política desigual. Este tipo de protesta devela que los actores institucionales también recurren a la acción directa cuando consideran que el canal institucional ha perdido eficacia.

Por otro lado, organizaciones indígenas como Cidob y Conniob han desarrollado acciones legales y movilizaciones pacíficas para exigir su participación en las elecciones generales de 2025, como pueblos indígenas, al margen de los partidos políticos, argumentando que el marco legal vigente —especialmente la Ley de Organizaciones Políticas— restringe su derecho de participación. Cidob presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, solicitando el reconocimiento de la capacidad indígena para presentar candidaturas propias; las respuestas institucionales a estas demandas han sido ambiguas o tardías, generando frustración y mayor desconfianza.

Las formas de movilización predominantes en estos conflictos son generalmente pacíficas: vigiliadas, presentación de recursos judiciales y huelgas de hambre, aunque en algunos casos se procedió a retener a funcionarios electorales y a amenazar con el bloqueo carretero. El componente discursivo es particularmente sensible ya que los movilizadores denuncian una "captura del árbitro electoral", una manipulación de las reglas del juego y una distribución arbitraria de escaños y circunscripciones que favorece intereses partidarios, especialmente del oficialismo.

En términos territoriales estos conflictos se concentran en Sucre, La Paz, El Alto y algunas otras capitales de departamento donde funcionan oficinas del OEP y TCP. No obstante, se ha observado una creciente presencia de actores regionales y comunales.

Es necesario mencionar la existencia de un temor recurrente: la falta de confianza en las instituciones podría influir sobre la credibilidad de los resultados electorales, generando un escenario de alta conflictividad postelectoral.

"Nadie garantiza que las elecciones sean aceptadas por todos".¹³⁵

134 George Komadina, entrevista.

135 Ricardo Fuentes, entrevista.

A diferencia de otros campos de conflictividad política, en los cuales las demandas pueden ser resueltas mediante acuerdos, en este caso el problema que está en la base es el de las reglas del juego y de la confianza, lo que limita el margen de negociación y hace más compleja la resolución de los casos. Las instituciones participantes en el proceso electoral, lejos de ser vistas como garantes de un proceso democrático, son percibidas como parte del conflicto, debilitando su capacidad de arbitraje.

Por lo expuesto, se trata de un campo de conflictividad estratégico, en el que se pone en juego la legitimidad del proceso democrático en su conjunto. Si no se restablece la credibilidad en las instituciones, principalmente en el Órgano Electoral y en los procedimientos que regulan la competencia política, el país corre el riesgo de entrar a un proceso electoral sin acuerdos generales, abriendo la posibilidad de crisis postelectorales de alta intensidad. En ese sentido podrían estallar conflictos, no sólo como disputa por los resultados, sino como confrontación más profunda que ponga en riesgo la transición democrática.

II.2.3. PATRONES DE LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA

"Estamos en un momento de agregación de conflictividades múltiples: económica, partidaria, productiva, climática y simbólica"¹³⁶

El ciclo de conflictividad política en Bolivia entre los años 2023 y 2025 muestra una transformación significativa de los patrones de movilización. Si bien los repertorios tradicionales de marchas, vigiliadas, huelgas y bloqueos se mantienen, los actores involucrados, la distribución de los casos y su intensidad han cambiado en consonancia con el contexto político fragmentado.

"Cuando el conflicto se vuelve estructural y permanente deja de ser una excepción democrática y se convierte en una forma de gobierno de facto."¹³⁷

Uno de los elementos más notables es la prevalencia del bloqueo de caminos como mecanismo dominante, especialmente en el campo económico, pero también en conflictos por judicialización, disputa partidaria y gobernabilidad. Según los datos registrados, más del 30% de los episodios de conflicto del período tuvieron el bloqueo de carreteras como medida de presión principal, lo cual es expresión de su efectividad táctica, así como de la percepción extendida de que los canales

136 Emma Lazcano, entrevista.

137 Fernando Mayorga, entrevista.

institucionales no responden a tiempo y con eficacia. El uso intensivo de bloqueos prolongados —como los protagonizados por sectores evistas en febrero y noviembre de 2024 y mayo y junio de 2025, que paralizaron puntos clave del país durante más de 50 días— revela que se ha convertido en un instrumento central de la disputa política, pese a su creciente impopularidad por el daño económico y de otros tipos que ocasiona.

En paralelo se observa una mezcla de repertorios de acción, en la que la presión callejera convive con la judicialización del conflicto (presentación de recursos de inconstitucionalidad, amparos y demandas ante las diferentes instancias judiciales), lo cual es especialmente frecuente en los campos de judicialización de la política y desconfianza electoral, en los que las acciones se trasladan al plano jurídico sin abandonar las calles.

La declaratoria de "estado de emergencia" aparece en cerca de la mitad de los conflictos como fase previa a la movilización efectiva. Dicha práctica está presente en los casos protagonizados por organizaciones que la han usado tradicionalmente (Csutcb, federaciones del trópico de Cochabamba), como en juntas vecinales y colectivos ciudadanos. Su función es sentar una posición pública sin necesidad de desplegar inmediatamente medidas de mayor afectación, generar presión preventiva y condicionar decisiones institucionales.

El espectro de actores movilizados es amplio, incluyendo organizaciones sociales de trayectoria nacional (Pacto de Unidad, organizaciones campesinas), plataformas urbanas, cívicos departamentales, militantes de partidos políticos e incluso autoridades electas. Esta diversidad es resultado de la crisis de representación y de la multiplicación de canales autónomos de acción política; en varios casos —como los impulsados por el colectivo Ríos de Pie y por vecinos de distritos municipales— las demandas no provienen de estructuras partidarias, sino que constituyen acciones descentralizadas que interpelan directamente a diferentes ámbitos de poder.

"Ya no hay actores que administren la tensión... todos son parte del conflicto. Eso lo vuelve más complejo, más impredecible."¹³⁸

Es necesario hacer referencia al carácter crecientemente confrontacional de muchas movilizaciones. A diferencia de periodos anteriores, se ha incrementado la frecuencia de enfrentamientos entre sectores sociales, no únicamente con el Estado. Conflictos internos del MAS —por el control de sedes partidarias y sindicales—, choques entre organizaciones con agendas divergentes (como en Cochabamba, donde activistas protestaron contra la Asamblea Legislativa Departamental por haber entregado una distinción a Evo Morales; en El Alto, donde facciones de FEJUVE enfrentadas pugnaron por el control de la dirigencia; o en Santa Cruz,

138 Luciana Jáuregui, entrevista.

donde vecinos exigieron la renuncia del alcalde Jhonny Fernández al acusarlo de traidor por su postura ante la detención de Luis Fernando Camacho y el conflicto por el Censo) evidencian una pérdida de legitimidad de los canales de mediación política y una afectación profunda del tejido social.

Si bien los niveles de violencia en la conflictividad política no son, en términos generales, los más altos, se presenta cierta propensión a la confrontación directa, tanto entre grupos civiles como con las fuerzas del orden, y han ocurrido episodios sumamente violentos. Ejemplo claro de esta tendencia son las movilizaciones del evismo, que entre febrero de 2024 y junio de 2025 generaron múltiples episodios de violencia. El caso más grave ocurrió en Llallagua en junio del presente año, área en la cual, según se denunció, operan redes vinculadas al narcotráfico y donde los movilizados usaron armas de fuego y dinamita, causando la muerte de cuatro efectivos policiales.

En términos geográficos, aunque el eje urbano La Paz - Cochabamba - Santa Cruz concentra la mayor parte de los casos, los conflictos políticos se han extendido hacia ciudades intermedias, donde se articulan demandas sectoriales con disputas nacionales, descentralización que refuerza la intensidad del ciclo, al hacer que múltiples focos de movilización operen de manera simultánea.

“La protesta se ha vuelto el único modo en que la gente siente que puede hacerse escuchar.”¹³⁹

En este contexto, resulta evidente que los patrones de movilización no responden únicamente a una lógica racional, los conflictos por legitimidad, identidad y pertenencia políticas tienen un importante trasfondo emocional y simbólico. En esa línea, el adversario es percibido como una amenaza existencial, no como un interlocutor con el que se puede mantener las diferencias o llegar a acuerdos, lo cual reduce los márgenes de negociación y refuerza dinámicas de radicalización, en las que la movilización no busca tanto incidir en decisiones concretas, sino reafirmar una posición política secante en un contexto crecientemente multifacético.

“El problema no es la existencia de conflicto, sino la ausencia de canales institucionales para resolverlo.”¹⁴⁰

Esta situación se ve reforzada por el fenómeno de sobreinformación y desinformación, la saturación de contenidos mediáticos, de discursos polarizados y de rumores alarmistas construyen una percepción de crisis sostenida, incluso en

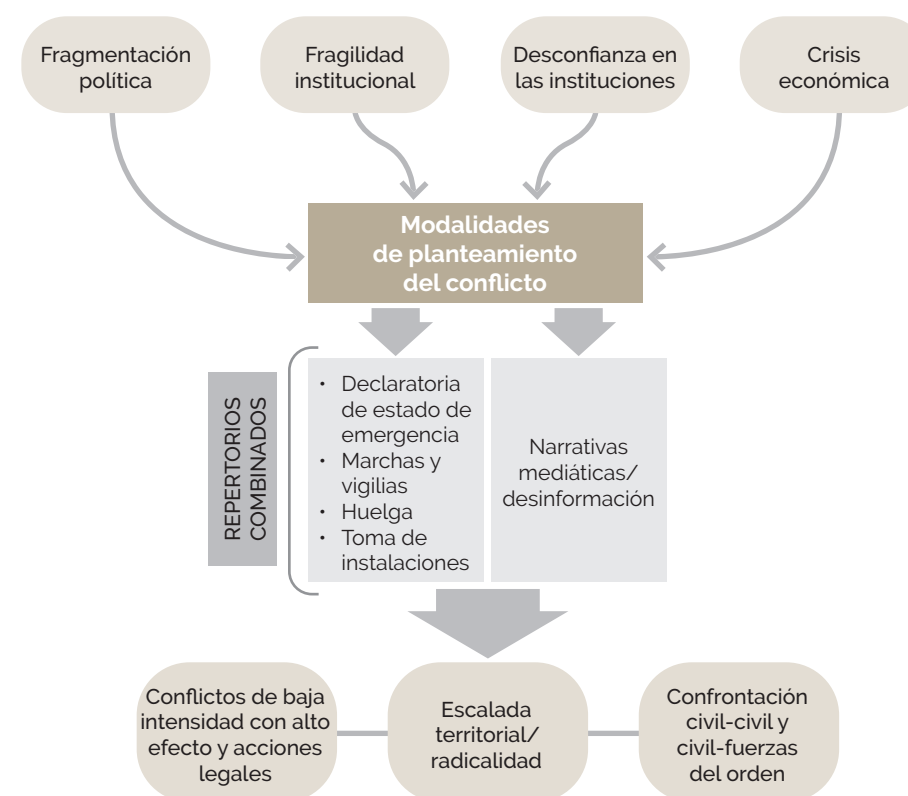
139 Erika Brockmann, entrevista.

140 Henry Gutierrez, entrevista.

momentos de menor tensión y conflictividad real. Este clima erosiona aún más la confianza pública en las instituciones y convierte cualquier tensión local, incluso menor, en un posible detonante de conflicto nacional. El uso de la desinformación por actores políticos –especialmente en un contexto electoral– distorsiona la lectura de los hechos, agudiza la confrontación y alimenta una narrativa de inestabilidad crónica.

En definitiva, los patrones actuales de conflictividad política combinan la presión local, la judicialización, la acción simbólica y la manipulación informativa, dando lugar a un escenario en el cual el conflicto, más que una herramienta de demanda social se convierte en un mecanismo de la disputa –con frecuencia ilegítima– por el poder.

Gráfico N° 4 Patrones la conflictividad política



Fuente: elaboración propia

CAPÍTULO III

PERSPECTIVAS DE LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA ELECTORAL

(AGOSTO – DICIEMBRE 2025)



Capítulo III

PERSPECTIVAS DE LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA ELECTORAL (AGOSTO – DICIEMBRE 2025)

A partir del análisis expuesto en los capítulos precedentes y con la finalidad de plantear algunas líneas de perspectiva de la conflictividad político electoral en el país en el corto plazo, es decir hasta la finalización del año, se realizó un ejercicio prospectivo con participación del equipo de especialistas en investigación de conflictos de la Fundación UNIR y con el apoyo de un experto en prospectiva.

En términos metodológicos se aplicó el análisis estructural y de riesgos que, combinados, aportan pistas para una navegación interpretativa en la difícil coyuntura actual del país. Es necesario aclarar que dichos métodos fueron adaptados en función del tamaño del equipo de trabajo y de la disponibilidad de tiempo, por lo cual más que el planteamiento de escenarios prospectivos, el ejercicio aporta insumos analíticos que se espera contribuyan a descifrar las múltiples incertidumbres y tensiones que caracterizan el momento actual en el que los actores del país están llamados a reforzar la gobernabilidad democrática y la construcción de visiones compartidas de futuro.

Es importante señalar que este ejercicio prospectivo comprende un horizonte temporal limitado: el período de seis meses comprendido entre julio y diciembre de 2025, que incluye la realización de las elecciones generales del 17 de agosto, la realización de la segunda vuelta electoral (si se requiere) el 20 de octubre y el inicio de la etapa postelectoral.

III. 1. DESARROLLO DEL EJERCICIO DE ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS

Para iniciar el trabajo se realizó una reflexión sobre las siguientes cuestiones vinculadas con la problemática de investigación:

- ¿Qué enunciado o pregunta define el desafío principal de forma clara, comprensible y concreta?
- ¿Cuál es el desafío al que deben responder el Estado y la sociedad en el mediano plazo?
- ¿Qué horizonte se visualiza como el más favorable? ¿Cuáles son sus características?

A partir de estas interrogantes, se planteó la siguiente pregunta para la realización del ejercicio prospectivo:

¿Es posible que los actores sociopolíticos en Bolivia lleguen a acuerdos mínimos que permitan la gobernabilidad mitigando la confrontación y la violencia?

Con base en esta pregunta se planteó el escenario que representaría una respuesta afirmativa (¿qué sucedería en el país en ese escenario? ¿qué horizonte representa?), definiendo las siguientes características principales:

- Se iniciaría un proceso de restauración de la cohesión y confianza interpersonal y social
- Se fortalecería la institucionalidad democrática y la credibilidad de las instituciones
- Se avanzaría hacia la construcción de un sistema de partidos apelando a la generación de acuerdos orientados al bien común
- Se privilegiaría el diálogo para la gestión de tensiones y conflictos
- Se reduciría la confrontación y la violencia políticas
- Aumentaría la satisfacción y el apoyo a la democracia

Se aplicó el enfoque de análisis estructural que plantea que cualquier problemática puede ser descrita y estudiada como un sistema dinámico compuesto por variables interrelacionadas, interdependientes y con direccionalidad abierta, de las que depende su situación actual y posible evolución; mientras mayor sea la capacidad de las variables de afectar al sistema en su conjunto, más determinantes serán para el futuro. En ese sentido se analizó la relación existente entre las variables y la problemática expresada en la pregunta prospectiva y entre cada una de éstas, viendo cómo esa interacción podría impactar en su evolución.

Para ello se identificó de qué variables depende que los actores sociopolíticos del país lleguen a acuerdos mínimos que fortalezcan la gobernabilidad democrática, mitigando la confrontación y la violencia. Agrupadas en tres tipos o dimensiones (político institucionales, económicas y socioculturales) las variables son las siguientes:

Tabla N°1 Variables identificadas

N°	Variables político institucionales
1	Debilidad y descrédito de la institucionalidad democrática • Poca confianza en el Órgano Electoral / padrón electoral / conteo de votos / riesgo de fraude • Cuestionamiento / erosión de las reglas del juego democrático
2	Debilitamiento del Estado de derecho • Desigualdad en las relaciones de poder entre Ejecutivo y Legislativo / parálisis del Legislativo • Bloqueo entre poderes / desinstitucionalización del Estado / suprapoder (TCP) • Crisis de la justicia
3	Deficiencia de la gestión pública • Débil capacidad estatal

4	Crisis interna del MAS • Erosión del liderazgo carismático de Evo Morales / alianzas corporativas clientelares
5	Poder fáctico de sectores corporativos
6	Caudillismo / personalismo / liderazgos sin partido
7	Incapacidad de llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional
8	Crisis de representación del sistema de partidos (organizativa / institucional / programática)
9	Fin de ciclo: ¿nuevo mapa político de poder?
10	Aplazamiento de las elecciones y/o rechazo a sus resultados

N°	Variables económicas
11	Declive de la producción de gas / escasez de diésel y gasolina / subvención
12	Escasez de dólares / tipo de cambio fijo
13	Elevación de precios de la canasta familiar
14	Escasez de productos
15	Agotamiento del modelo económico / crisis de liquidez del Estado

N°	Variables socioculturales
16	Desinformación
17	Crisis de integración / cohesión social / agotamiento del pacto social
18	Cultura política autoritaria / acentuación del autoritarismo
19	Incertidumbre, miedo y rabia

Fuente: elaboración propia

Una vez identificadas las variables que son parte de la problemática estudiada (ausencia de acuerdos mínimos entre los actores sociopolíticos que permitan la gobernabilidad mitigando la confrontación y la violencia) se hizo una categorización de cada una mediante la elaboración de una matriz de impactos cruzados que permitió evaluar su motricidad y dependencia¹⁴¹.

La metodología del análisis estructural proviene de la escuela francesa de prospectiva¹⁴² y facilita la estructuración de una reflexión colectiva (y la creación de un lenguaje común) de un grupo de trabajo a partir de la descripción cualitativa de la relación entre todos los elementos constitutivos de una determinada problemática.

141 La motricidad representa la influencia de una variable sobre otra; inversamente, la dependencia es la subordinación de una a otra.

142 Godet, M. (2007). La prospectiva estratégica. Problemas y métodos.

tica o tema de estudio. Bajo este enfoque se entiende que cualquier variable existe únicamente por su interrelación con otras variables.

Al aplicar este método se trató de identificar aquellas variables que están en conflicto y son esenciales en la evolución del sistema; es decir, las que son tanto influyentes (motrices) como dependientes. Para realizar este análisis cualitativo aplicado al estudio de las perspectivas futuras de la gobernabilidad democrática en Bolivia se reflexionó sobre el tipo de influencia que ejerce cada variable sobre las demás y si es alta (2), media (1) o baja (0), asignando el valor numérico correspondiente.

Tabla N° 2 Matriz de impactos cruzados para análisis de variables

¿Esta variable influye en la otra? ¿Cuánto?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	X	1	2	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
2	2	X	2	0	2	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2
3	2	0	X	0	2	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	1	0	2	1
4	2	2	2	X	2	0	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
5	1	2	2	0	X	0	1	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2
6	2	2	0	2	2	X	2	2	1	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1
7	2	1	2	0	1	0	X	0	1	1	1	1	1	2	0	1	0	2	1
8	2	2	1	0	2	2	1	X	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1
9	1	1	1	1	2	1	2	2	X	1	1	1	1	1	0	1	0	2	0
10	0	0	2	0	1	0	0	0	0	X	0	1	1	2	1	0	0	2	1
11	0	0	2	1	2	0	0	0	1	2	X	2	2	2	1	0	0	2	2
12	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	X	1	2	1	0	0	2	0
13	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	X	1	1	0	0	2	0
14	1	1	2	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	X	0	1	0	2	0
15	2	2	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	1	X	1	2	2	2
16	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	X	2	2	1
17	2	2	1	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	X	1	1
18	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1	1	1	1	1	2	1	1	X	1
19	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	X

S = Sí; N = No

M = Mucho; P = Poco; N = Nada

M = 2; P = 1; N = 0

Fuente: elaboración propia

A continuación se indagó el valor y porcentaje de motricidad y dependencia de cada variable y se evaluó si estos valores son superiores o inferiores al valor del coeficiente de la matriz que, en este caso, es de 5.26 %.

Tabla N.º 3 Matriz de impactos cruzados para análisis de variables

¿Esta variable influye en la otra? ¿Cuánto?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	MOT	%
1	X	1	2	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	21	5.80
2	2	X	2	0	2	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2	21	5.80
3	2	0	X	0	2	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	1	0	2	1	18	4.97
4	2	2	2	X	2	0	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	29	8.01
5	1	2	2	0	X	0	1	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	19	5.24
6	2	2	0	2	2	X	2	2	1	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	22	6.07
7	2	1	2	0	1	0	X	0	1	1	1	1	1	2	0	1	0	2	1	18	4.97
8	2	2	1	0	2	2	1	X	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	18	4.97
9	1	1	1	1	2	1	2	2	X	1	1	1	1	1	0	1	0	2	0	19	5.24
10	0	0	2	0	1	0	0	0	0	X	0	1	1	2	1	0	0	2	1	11	3.03
11	0	0	2	1	2	0	0	0	1	2	X	2	2	2	1	0	0	2	2	19	5.24
12	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	X	1	2	1	0	0	2	0	11	3.03
13	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	X	1	1	0	0	2	0	10	2.76
14	1	1	2	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	X	0	1	0	2	0	21	5.80
15	2	2	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	1	X	1	2	2	2	24	6.62
16	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	X	2	2	1	16	4.41
17	2	2	1	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	X	1	1	19	5.24
18	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1	1	1	1	1	2	1	1	X	1	17	4.69
19	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	X	31	8.56
DEP	23	20	28	13	26	11	13	13	21	15	13	18	17	26	19	18	17	33	20	362	X
%	6.35	5.52	7.73	3.59	7.18	3.03	3.59	3.59	5.80	4.14	3.59	4.97	4.69	7.18	5.24	4.97	4.69	9.11	5.52	X	100

S = Sí; N = No

M = Mucho; P = Poco; N = Nada

M = 2; P = 1; N = 0

Fuente: elaboración propia

Como resultado del análisis de causalidad realizado, las variables fueron aglomeradas en cuatro grupos según su grado de influencia (motricidad) y dependencia:

- *Variables de tendencia/poder:* tienen alta influencia y baja dependencia; por tanto, tienen alta relevancia en la problemática y cualquier modificación en ellas tendrá repercusión en la evolución de toda la problemática.

- *Variables en conflicto/críticas*: tienen alta influencia y dependencia (vulnerabilidad), por lo tanto, están en situación de conflicto. Son determinantes para la problemática estudiada ya que los actores con sus decisiones pueden modificar el rumbo de estas variables.
- *Variables autónomas*: tienen baja influencia y dependencia, es decir, que no influyen ni son influidas por el resto de las variables.
- *Variables de salida/vulnerables*: tienen baja influencia y alta dependencia (vulnerabilidad); por tanto, están en situación de salida.

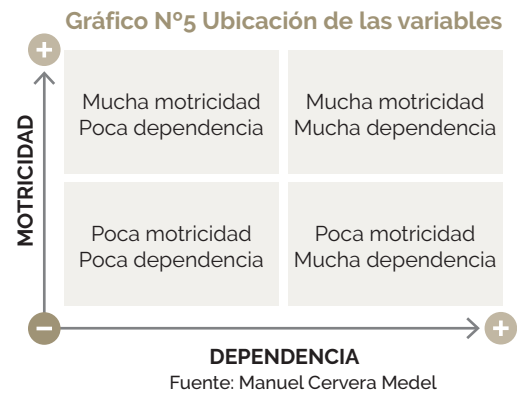


Tabla N° 4 Ubicación de las variables

	% MOTRICIDAD	% DEPENDENCIA	MOTRICIDAD	DEPENDENCIA	UBICACIÓN
1	5.80	6.35	Sí	Sí	Conflicto
2	5.80	5.52	Sí	Sí	Conflicto
3	4.97	7.73	No	Sí	Salida
4	8.01	3.59	Sí	No	Poder
5	5.24	7.18	No	Sí	Salida
6	6.07	3.03	Sí	No	Poder
7	4.97	3.59	No	No	Autónoma
8	4.97	3.59	No	No	Autónoma
9	5.24	5.80	No	Sí	Salida
10	3.03	3.14	No	No	Autónoma
11	5.24	3.59	No	No	Autónoma
12	3.03	4.97	No	No	Autónoma
13	2.76	4.69	No	No	Autónoma
14	5.80	7.18	Sí	Sí	Conflicto
15	6.62	5.24	Sí	No	Poder

	% MOTRICIDAD	% DEPENDENCIA	MOTRICIDAD	DEPENDENCIA	UBICACIÓN
16	4.41	4.97	No	No	Autónoma
17	5.24	4.69	No	No	Autónoma
18	4.69	9.11	No	Sí	Salida
19	8.56	5.52	Sí	Sí	Conflicto

Fuente: elaboración propia

Como resultado del análisis de la interrelación entre las variables se identificó lo siguiente:

- Tres variables son de poder:

Crisis interna del MAS

Erosión del liderazgo carismático de Evo Morales / alianzas corporativas clientelares

Caudillismo / personalismo / liderazgos sin partido

Desinformación
- Cuatro variables son de conflicto:

Debilidad y descrédito de la institucionalidad democrática

Poca confianza en el Órgano Electoral / padrón electoral / conteo de votos / riesgo de fraude

Cuestionamiento / erosión de las reglas del juego democrático

Debilitamiento del Estado de derecho

Desigualdad en las relaciones de poder entre Ejecutivo y Legislativo / parálisis del Legislativo

Bloqueo entre poderes / desinstitucionalización del Estado / suprapoder (TCP)

Crisis de la justicia

Agotamiento del modelo económico / crisis de liquidez del Estado

Aplazamiento de las elecciones y/o rechazo de sus resultados
- Cuatro variables son de salida:

Deficiencia de la gestión pública

Débil capacidad estatal

Poder fáctico de sectores corporativos

Fin de ciclo: ¿nuevo mapa político de poder?

Incertidumbre, miedo y rabia

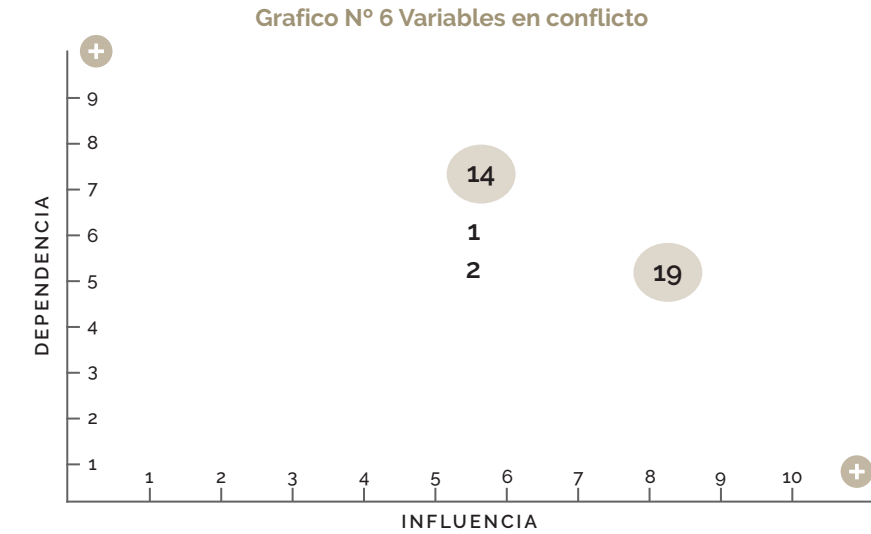
Ocho variables son autónomas:

Incapacidad de llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional
Crisis de representación del sistema de partidos (organizativa / institucional / programática)
Declive de la industria del gas / escasez de diésel y gasolina / subvención
Escasez de dólares / tipo de cambio fijo
Elevación de precios de la canasta familiar
Escasez de productos
Crisis de integración / cohesión social / agotamiento del pacto social
Cultura política autoritaria / acentuación del autoritarismo

De acuerdo con el análisis estructural, del conjunto de variables estudiadas sobre una problemática en particular, las que están en situación de conflicto son las más determinantes ya que influyen y son influidas por el resto, lo cual implica que son inestables por naturaleza. Debido a ello se entiende que cualquier decisión o acción de los actores sobre estas variables críticas puede tener repercusiones que afecten al conjunto de la problemática.

Tras haber calculado el valor de cada variable se identificó aquellas que tienen los valores más altos de influencia (motricidad) y dependencia (vulnerabilidad); es decir, aquellas que están más alejadas del punto de origen:

- Agotamiento del modelo económico / crisis de liquidez del Estado
- Aplazamiento de las elecciones y/o rechazo de sus resultados



Fuente: elaboración propia

Como se observa, una de las variables críticas es económica (agotamiento del modelo económico / crisis de liquidez del Estado) mientras que la otra es político institucional (aplazamiento de las elecciones y/o rechazo de sus resultados). De acuerdo con la metodología del análisis estructural, los actores sociopolíticos tienen la capacidad de cambiar, con sus decisiones, el rumbo de estas variables en el corto plazo.

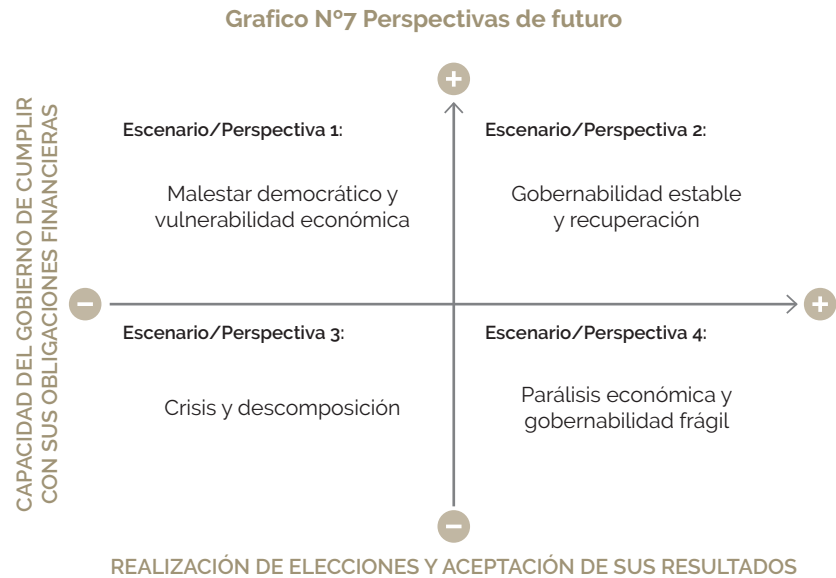
Por otra parte se identificaron tres variables de poder, aquellas que son muy influyentes y poco dependientes de las demás:

- Crisis interna del MAS
- Caudillismo / personalismo / liderazgos sin partidos
- Desinformación

De acuerdo con el análisis estructural, las variables de poder son muy influyentes y poco dependientes. Por tanto son explicativas del sistema y condicionan la dinámica del conjunto, de ahí deriva su importancia. Cualquier modificación en éstas tiene derivaciones en todo el sistema.

Posteriormente se identificaron las perspectivas de futuro que emergen del análisis de la interrelación de las dos variables de conflicto más importantes: agotamiento del modelo económico y aplazamiento de las elecciones o rechazo de sus resultados, reformulándolas en un sentido neutral:

- Capacidad del Gobierno de cumplir con sus obligaciones financieras (de corto plazo)
- Realización de elecciones y aceptación de sus resultados



Fuente: elaboración propia

III.2. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO

El análisis realizado permitió delinear cuatro perspectivas posible a corto plazo (diciembre 2025), las cuales son las siguientes:

Perspectiva 1: Malestar político y vulnerabilidad económica

En la perspectiva de inicio y más próxima a la trayectoria actual, se mantiene la inercia de la crisis económica; sin embargo, los actores sociopolíticos logran acuerdos mínimos que evitan el colapso. El Gobierno saliente logra satisfacer parcialmente, no sin dificultades, la demanda de combustibles, dólares, productos y servicios básicos, aunque se mantienen las filas de personas. Aunque la inflación anual se mantiene alta, se logra estabilizar la variación de precios, lo que impacta en la cotización del dólar en el mercado paralelo, recuperar el boliviano algo de terreno. Si bien no desaparecen, las protestas de diferentes sectores de la población no son tan frecuentes, lo que ayuda a disminuir la sensación de incertidumbre.

Por otra parte, el Gobierno asegura la realización de las elecciones del 17 de agosto; sin embargo, se mantiene alta la desconfianza electoral, se producen altercados e intentos de boicot (impedir la votación) y proliferan los cuestionamientos e impugnaciones con episodios de conflictividad y violencia, especialmente aquellos protagonizados por grupos de seguidores de Evo Morales. Esto debilita el proceso y los resultados de la votación (tanto en primera como en segunda vuelta); por tanto afecta la legitimidad de origen del nuevo gobierno. Con escaso margen de maniobra, su primera tarea es corregir los desequilibrios macroeconómicos del país para cumplir con las obligaciones financieras. Sin embargo, en esta perspectiva, aunque el nuevo gobierno logra algunos avances, los impactos son limitados debido a los problemas surgidos en torno a la realización de las elecciones y la aceptación de sus resultados, por lo que se mantiene alta la incertidumbre de la población.

Perspectiva 2: Gobernabilidad estable y recuperación

Esta perspectiva representa el escenario ideal en el que el gobierno saliente logra asegurar con relativa normalidad la realización de elecciones (tanto en primera como en segunda vuelta), aunque con episodios aislados de conflicto que no alcanzan a afectar su integridad ni la vigencia plena de los resultados. En la previsión de que ningún candidato logre los votos necesarios en primera vuelta, el Gobierno y los actores sociopolíticos blindan, a través de acuerdos y compromisos, la realización de la segunda vuelta y aíslan a los grupos que amenazan con impedirla; por tanto, se recupera la confianza en las elecciones y no se afecta la legitimidad de origen del nuevo gobierno que reúne la fuerza necesaria para llegar a acuerdos mínimos con los actores sociopolíticos del país, lo cual tiene un impacto positivo en la opinión pública y permite reducir la conflictividad, la confrontación y la violencia. Asimismo, estos acuerdos per-

miten establecer un piso mínimo para resolver la fragilidad institucional del país, en particular la paralización de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la situación crítica de la justicia, por lo que los actores políticos recuperan algo de la confianza ciudadana y se reestablece gradualmente la legitimidad de las reglas del sistema democrático (dejando de lado la judicialización de la política). En esta perspectiva, los actores sociopolíticos sientan las bases de una recuperación progresiva de la institucionalidad en la que los principales órganos de poder público del Estado recobren su rol como garantes de la gobernabilidad democrática y la convivencia pacífica en el país. En última instancia, estos avances permiten atenuar la polarización política y generan espacios de reencuentro y diálogo que devuelven cierto protagonismo y legitimidad a los partidos para superar su crisis de representación.

En el plano económico, el Gobierno logra gestionar mínimamente los desequilibrios de la economía evitando el colapso y escenarios de mayor conflictividad que ahonden la crisis. Sobre esa base y la de una legitimidad política institucional, el nuevo gobierno alcanza algunos avances que permiten superar la crisis de liquidez en el corto plazo. Por tanto, comienzan a solucionarse progresivamente la escasez de combustibles, la inflación de precios y la escasez de divisas en dólares, reduciendo la sensación de intranquilidad e incertidumbre y atenuando los conflictos sectoriales y disputas políticas más amplias.

Perspectiva 3: Crisis y descomposición

La tercera perspectiva representa el peor de los escenarios ya que confluyen en ésta la impugnación de los resultados electorales (en primera y segunda vuelta, ambas afectadas por conflictos y protestas) con el desborde de la crisis económica (agravamiento de la escasez de divisas, combustibles y productos, e incremento descontrolado de precios) y la descomposición social. Esta conjunción de factores podría determinar un desarrollo dificultoso del proceso electoral (bloqueo a la distribución de la boleta electoral, etc.) que reste legitimidad de origen al nuevo gobierno y, en ausencia de acuerdos entre los diferentes actores políticos, es débil y no puede adoptar medidas de estabilización económica. En esta perspectiva se profundiza la crisis de gobernabilidad democrática, la desconfianza electoral y el desgaste del Estado de derecho. Como resultado, se produce un estallido de la conflictividad sociopolítica, de la confrontación y aumenta la violencia en el país. Se cierra la posibilidad de establecer acuerdos mínimos de gobernabilidad debido a la radicalización de posiciones de las organizaciones políticas y sociales.

El resultado es un escenario de crisis de gobernabilidad con una probable situación de anomia.

Perspectiva 4: Parálisis económica y gobernabilidad frágil

En el cuarto escenario se presenta una agudización de la crisis económica que produce una escalada de la conflictividad debilitando al nuevo gobierno, pese a que

los resultados de la votación son aceptados y reconocidos. El Gobierno no puede cumplir en el corto plazo el abastecimiento de combustibles, dólares y productos, ni el pago de la deuda externa. Por tanto, la agudización de la crisis económica debilita y resta margen de acción al nuevo gobierno que, aunque haya surgido de una votación reconocida por los actores sociopolíticos, se ve sobrepasado por la crisis económica y no puede revertir la crisis de gobernabilidad.

En este panorama se refuerza un clima de confrontación en torno a los problemas macroeconómicos y la forma de resolverlos. Dicho de otro modo, la crisis económica se agrava y actúa como catalizador de mayor conflictividad vinculada principalmente al alto costo de vida, a la precarización laboral, a la falta de inversión pública, a la escasez de bienes de consumo y al deterioro de los servicios.

III.3. ANÁLISIS DE RIESGOS

Tomando como base el trabajo de planteamiento de perspectivas, se realizó un análisis de riesgos en torno al bien común que se busca proteger en el país: la gobernabilidad democrática. Este análisis se enfocó en los peligros que podrían derivarse de la ausencia de acuerdos mínimos entre los actores sociopolíticos y del avance de la confrontación y violencia, como mecanismos predominantes de interacción política y social.

Con base en la metodología propuesta por Manuel Cervera Medel, se evaluaron tanto los principales riesgos estructurales como coyunturales, considerando dos criterios: la importancia, entendida como el nivel de impacto o daño que puede generar un riesgo y la vulnerabilidad frente a éste; y la probabilidad, que hace referencia a la probabilidad de que el riesgo se materialice. Ambos fueron calificados en una escala de 1 a 5; permitiendo así estimar su magnitud relativa y clasificarlos en cuatro niveles: leve, moderado, severo y grave.

Tabla N° 5 Riesgos identificados

N°	Riesgo	Clasificación	Importancia	Probabilidad	Magnitud	
					Calificación	Tipo
1	Cultura política confrontacional y violenta	Estructural	3	4	12	Severo
2	Boicot a las elecciones	Coyuntural	5	5	25	Grave
3	Desconocimiento de resultados electorales	Coyuntural	5	3	15	Severo
4	Mayor debilitamiento de la institucionalidad pública	Estructural	3	3	9	Moderado

5	Mayor debilitamiento del Estado de derecho	Estructural	3	3	9	Moderado
6	Frustración de expectativas de recuperación económica inmediata	Coyuntural	5	5	25	Grave
7	Alta conflictividad política y económica	Coyuntural	5	4	20	Grave
8	Injerencia política en el Órgano Judicial	Estructural	4	3	12	Severo
9	Desinformación	Coyuntural	3	4	12	Severo
10	Incremento de incertidumbre respecto a las reglas del juego democrático (TCP)	Coyuntural	4	3	12	Severo
11	Incremento del poder fáctico de sectores corporativos	Coyuntural	4	3	12	Severo
12	Profundización de la desintegración social	Estructural / Coyuntural	4	3	12	Severo

Fuente: elaboración propia

Como resultado, el análisis permitió identificar doce riesgos relevantes, entre los cuales tres son de magnitud grave, todos de naturaleza coyuntural, siete severos (estructurales/coyunturales) y dos moderados (estructurales). Los riesgos graves no sólo representan amenazas latentes, sino que, de materializarse, podrían tener efectos inmediatos y profundos sobre la estabilidad democrática y la conducción institucional del país, de ahí que se consideren prioritarios para la acción preventiva mediante estrategias de mitigación.

Los riesgos graves identificados, en orden de importancia, son los siguientes:

- Boicot a las elecciones
- Frustración de expectativas de recuperación económica inmediata
- Alta conflictividad política y económica

Los dos primeros riesgos coinciden con los resultados del análisis estructural realizado, reforzando su carácter determinante: agotamiento del modelo económico, con su subsecuente impacto sobre las expectativas sociales de recuperación inmediata, y la posibilidad de aplazamiento de las elecciones y/o boicot que dificultaría el reconocimiento y legitimación de sus resultados. Ambos riesgos, que son de carácter coyuntural, están condicionados por las decisiones que los actores sociopolíticos puedan tomar en el corto plazo; en consecuencia, son variables que

pueden ser intervenidas mediante voluntad política de apertura al diálogo y establecimiento de acuerdos mínimos que fortalezcan el desarrollo del proceso electoral y la gobernabilidad democrática en el país.

El agravamiento o la atenuación del malestar social y de la conflictividad –que ponen en riesgo la gobernabilidad democrática y pueden generar mayor confrontación y violencia– dependen de la convergencia de varios factores estructurales y coyunturales que están en curso. Su agravamiento o contención están estrechamente vinculados con lo que vaya a suceder en el proceso electoral de agosto de 2025 –tanto en lo relativo a la realización de la primera vuelta, y de la segunda vuelta en octubre, si es necesaria, con integridad y solvencia, como a la aceptación de sus resultados– y con la capacidad tanto de los gobiernos saliente y nuevo para dar respuestas mínimas a la crisis económica que enfrenta el país.

III.3.1 Los riesgos graves en perspectiva

Boicot a las elecciones

Este riesgo tiene carácter inmediato y puede manifestarse en dos momentos críticos: durante la realización de la primera vuelta electoral el 17 de agosto y, si ningún candidato alcanza la mayoría requerida, en la segunda vuelta prevista para la primera quincena de octubre. A la complejidad estructural del contexto político e institucional se suma un elemento decisivo: las altas expectativas sociales, políticas e incluso simbólicas puestas en el proceso electoral como punto de inflexión para superar la crisis. En este contexto, poner en riesgo su realización no sólo debilitaría aún más la institucionalidad del país, sino que introduciría una mayor incertidumbre a una coyuntura ya altamente volátil.

El boicot puede adoptar diversas formas, tanto abiertas como encubiertas: bloqueos de vías, toma de instalaciones electorales, campañas de desinformación, judicialización en torno a candidaturas, impugnaciones, llamados al voto nulo e incluso narrativas sobre la ilegitimidad del proceso. Estas acciones podrían provenir de sectores radicalizados –en particular el evismo–, que han demostrado capacidad de movilización territorial. La ruptura interna del MAS, las disputas sobre las candidaturas y las dudas sobre la idoneidad de los organismos responsables han generado un entorno de alta fragilidad electoral, en el cual actuaciones dilatorias y de otro tipo pueden tensar aún más el proceso y ser vistas como señales de manipulación institucional.

El impacto principal de un boicot, incluso parcial, podría ser la erosión de la legitimidad del proceso y del mandato del nuevo gobierno. Este riesgo compromete tanto la jornada electoral como el proceso de conteo de votos y la aceptación posterior de los resultados, lo que podría desatar una espiral de impugnaciones y movilizaciones políticas. En ausencia de un mandato claro, el nuevo gobierno podría enfrentar severas limitaciones para ejercer autoridad y avanzar hacia la resolución de los principales problemas.

El riesgo no se limita al futuro gobierno, también alcanza al actual, que debe seguir administrando el país durante la realización segunda vuelta electoral –momento especialmente sensible en el que podrían intensificarse las tensiones políticas si no existen señales claras de transparencia e imparcialidad en la conducción del proceso y responsabilidad en las dirigencias políticas– y hasta la instalación del nuevo gobierno.

Evitar un desenlace negativo no depende de medidas técnicas o logísticas –las cuales no son poco importantes–, sino fundamentalmente de decisiones políticas orientadas a ofrecer las garantías mínimas necesarias de legitimidad del proceso electoral.

Frustración de expectativas de recuperación económica inmediata

La crisis económica del país ha acumulado un deterioro significativo: caída de los ingresos públicos y de las reservas internacionales, déficit fiscal, escasez de dólares y combustibles, subsidios insostenibles e inflación creciente que afectan la calidad de vida de los bolivianos. Pese a la profundidad de la crisis, amplios sectores de la población mantienen la expectativa de que el nuevo gobierno surgido de las elecciones revierta esta situación.

Si no se produce un alivio económico en el corto plazo es probable que amplios sectores –gremiales, transportistas, cooperativistas mineros, agropecuarios y otros sectores productivos, así como la población en general– reactiven protestas de alta intensidad que pongan en jaque la estabilidad del nuevo gobierno. Como ya se observó en períodos precedentes, las demandas económicas suelen combinarse con críticas a la gestión política, erosionando la legitimidad gubernamental. La instrumentalización política de la crisis por actores con agendas particulares puede profundizar la conflictividad e intentar nuevamente capitalizar los reclamos económicos en la disputa por el poder. Si bien este riesgo se proyecta con mayor fuerza sobre el nuevo gobierno, también afecta al actual, que debe seguir gestionando la crisis durante el periodo electoral. Si bien la percepción extendida de que no se está atendiendo adecuadamente la situación económica ya ha debilitado su legitimidad, la conflictividad permanece contenida ante la expectativa de que el proceso electoral permita una salida; sin embargo, esta contención es frágil y podría romperse una vez realizadas las elecciones.

La frustración de expectativas puede precipitar una crisis de gobernabilidad si no existen políticas sociales de amortiguación, acuerdos económicos básicos y una comunicación política transparente. Para evitar que la economía actúe como catalizador de la conflictividad será necesario establecer un horizonte claro de recuperación, con medidas urgentes de alivio y un discurso veraz sobre los límites de las acciones en el corto plazo. Además, se requiere fortalecer el rol del Estado en la regulación y contención de las tensiones y conflictos, evitando que la crisis económica alimente un ciclo de protestas que desborde las capacidades institucionales.

Alta conflictividad política y económica

La conflictividad política y económica actual no responde a causas aisladas, sino a un entramado de tensiones que se retroalimentan: crisis de representación, deterioro del modelo económico, deslegitimación institucional y debilitamiento del sistema de partidos. Este patrón ha generado un ciclo de protestas simultáneas y superpuestas que cuestionan el funcionamiento del Estado, el rol de los partidos y la distribución del poder.

La conflictividad ha adoptado un carácter territorial, con epicentros como el Trópico de Cochabamba, el norte de Potosí y áreas periurbanas de Santa Cruz y La Paz, donde se concentran demandas locales con fuerte carga simbólica nacional. En estos espacios, las protestas tienden a adquirir formas radicales –bloqueos de vías prolongados, toma de instituciones, enfrentamientos– con capacidad de generar crisis institucional. La falta de canales de mediación y la cooptación de las organizaciones sociales agravan este contexto, empujando a los actores a formas de presión más disruptivas.

En un contexto de persistente fragmentación política y con riesgos de mayor confrontación y violencia, es imperativo mitigar las lógicas de imposición, bloqueo y escalada de la conflictividad a fin de que los actores políticos y sociales encaucen democrática e institucionalmente este período de transición política y económica, cuyo punto de arranque son las elecciones generales, mediante acuerdos.

Una conflictividad de alta intensidad, persistente y sin mecanismos efectivos de encauce institucional puede desembocar en una crisis sistémica. En el corto plazo, obstruyendo la capacidad del nuevo gobierno para implementar medidas económicas y reformas políticas; a mediano plazo, minando la confianza en la democracia como forma de resolver disputas. La mitigación de este riesgo exige construir acuerdos políticos mínimos postelectorales, activar canales de diálogo y fortalecer el rol de actores intermediarios que aún conserven legitimidad. Si no es contenida, este tipo de conflictividad puede convertirse en el motor de una nueva crisis de gobernabilidad.

Históricamente, los países latinoamericanos cayeron en crisis de gobernabilidad y erosión democrática cuando el malestar ciudadano con la política, entendida como una insatisfacción profunda con el desempeño de las instituciones democráticas y el trabajo del gobierno, se combina con una percepción de crisis económica medida en el deterioro de las condiciones de vida de la población. Estas condiciones no sólo detonan conflictos sectoriales, sino que actúan como fermento de disputas políticas que pueden erosionar la democracia y la convivencia pacífica. En Bolivia todavía no se ha producido una crisis político institucional de esas características; sin embargo, preocupa que, durante al menos el último año, las percepciones de la ciudadanía y de los distintos liderazgos coincidan en evidenciar una fuerte pérdida de la confianza en el Gobierno y en los políticos y una sensación de que la situación económica del país y de las familias es mala y tiende a empeorar. Por tanto, están presentes los dos elementos que, en el pasado, se combinaron para

generar crisis de gobernabilidad. Como se dijo, probablemente el único elemento que contiene el estallido de una crisis con esas características sean las elecciones y la perspectiva de un cambio de gobierno que ofrezca soluciones reales a los graves problemas que aquejan al país. De ahí deriva la importancia fundamental de que el proceso electoral (primera y segunda vueltas) se realice con amplia participación, transparencia y legitimidad, a fin de que el nuevo gobierno cuente con las condiciones mínimas necesarias para proponer una agenda económica realista y equitativa que permita resolver la crisis, protegiendo a la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Por otra parte, debe anotarse que, en la coyuntura actual, el malestar con la política y sus instituciones no implica únicamente un riesgo sobre la autoridad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino sobre la de otros poderes del Estado, como el judicial. Tomando en cuenta las variables de conflicto y los riesgos identificados será importante monitorear la posibilidad de que el Órgano Judicial (y los magistrados autoprorrogados) sea el que ponga en riesgo la celebración normal de los comicios, judicializando el proceso electoral.

Parece al menos plausible que la combinación de un bajo apoyo al gobierno y una baja valoración de la situación económica sean condiciones necesarias, pero no suficientes por sí mismas, para la existencia de una crisis de gobernabilidad democrática. En ese marco, es fundamental evitar los riesgos entrelazados de una frustración de expectativas de recuperación económica inmediata y un boicot a las elecciones. Caso contrario, el estallido de una crisis de gobernabilidad podría ser inminente.

Finalmente, es importante señalar que las condiciones reales de riesgo de una crisis de gobernabilidad democrática en Bolivia dependen también de otros factores, como su historia, su tradicional contención ante la violencia, la legitimidad de las instituciones, el papel de las dirigencias y la vocación democrática de la población. Es a esto a lo que hay que apostar.

FUENTES CONSULTADAS

Agencia de Noticias Fides, edición del 5 de septiembre de 2024

30 de octubre de 2024

8 de abril de 2025

El Deber, edición del 27 de abril de 2018

La Razón, edición del 20 de agosto de 2023

8 de enero de 2025

3 de febrero de 2025

12 de junio de 2025

Los Tiempos, edición del 9 de abril de 2025

Baena P., Guillermina (2004). *Prospectiva política, guía para su comprensión y práctica*.

Banco Central de Bolivia. (2016). *Administración de las Reservas Internacionales. Gestión 2015*. https://www.bcb.gob.bo/webdocs/files_noticias/Adm_RIN_2015.pdf

Banco Mundial. (2025). *Perspectivas económicas mundiales*. <https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects>

Central Obrera Boliviana (2010). Documento de trabajo sobre el alza de precios de los productos de la canasta familiar.

Cervera M., Manuel (s/d), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Herramientas metodológicas para la prospectiva. Diplomado en prospectiva política aplicada - Módulo 2. Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP)*.

Ciudadanía, Konrad Adenauer Stiftung. (2024). *La democracia en los ojos de la gente, 25 años de cultura política en Bolivia*.

Corporación Latinobarómetro. (2025). *Informe Latinobarómetro 2024*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=0>

Fundación Friedrich Ebert. (2025, 19 de febrero). *Contexto y escenarios prospectivos 2025*. <https://bolivia.fes.de/actividades/default-89ec9e7ffa8af749fa8c8a3d8a307ccd.html>

Fundación Jubileo. (2024). *El destino del presupuesto público*. <https://jubileobolivia.org.bo/Publicaciones/La-Fiebre-del-Oro/El-destino-del-Presupuesto-Publico>

Godet, M. (2000). *La caja de herramientas de la prospectiva estratégica*. <http://es.lapropective.fr/dyn/espagnol/bo-lips-esp.pdf>

Godet, M. (2007). *La prospectiva estratégica. Problemas y métodos*. <https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/Godet2007.pdf>

INE. (2022, 5 de enero). *Índice de Precios al Consumidor registra incremento de 0,16% en diciembre de 2021*. <https://www.ine.gob.bo/index.php/indice-de-precios-al-consumidor-registra-incremento-de-016-en-diciembre-de-2021/#:~:text=%E2%80%93%20El%20%C3%8Dndice%20de%20Precios%20al,incremento%20de%200%2C90%25>.

INE. (2023, 5 de enero). *Índice de Precios al Consumidor registra incremento de 0,12% en diciembre de 2022*. <https://www.ine.gob.bo/index.php/indice-de-precios-al-consumidor-registra-incremento-de-012-en-diciembre-de-2022/>

INE. (2024, 4 de enero). *Índice de Precios al Consumidor registró una variación acumulada de 2,12% en diciembre de 2023*. <https://www.ine.gob.bo/index.php/indice-de-precios-al-consumidor-registro-una-variacion-acumulada-de-212-en-diciembre-de-2023/>

INE. (2025, 3 de enero). *El Índice de Precios al Consumidor registró una variación positiva de 1,06% en diciembre de 2024*. <https://www.ine.gob.bo/index.php/el-indice-de-precios-al-consumidor-registro-una-variacion-positiva-de-106-en-diciembre-de-2024/#:~:text=%E2%80%93%20La%20variaci%C3%B3n%20mensual%20del%20%C3%8Dndice,alcanz%C3%B3%20a%209%2C97%25>.

INESAD. (2020, 10 de febrero). *El aparato estatal tiene 526 mil funcionarios; por año crece 10%*. <https://www.inesad.edu.bo/2020/02/12/el-aparato-estatal-tiene-526-mil-funcionarios-por-ano-crece-10/>

Ministerio de Economía y Finanzas. (2024, 18 de noviembre). *La deuda pública total consolidada de Bolivia se encuentra por debajo de los umbrales internacionales de sostenibilidad*. <https://www.economiayfinanzas.gob.bo/node/12202>

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2024). *Boletín económico. Informe fiscal 2023*. https://www.economiayfinanzas.gob.bo/sites/default/files/2024-11/Boletin%20Economico_Informe%20Fiscal%202023.pdf

Proyecto UNAMONOS. (2024). *Segunda encuesta nacional de polarización*.

Souverain, J., Stolte, C., Velasco, A, Proyecto Unámonos. (2023). *Polarización política y social en Bolivia*. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/21000.pdf>

World Justice Project. (2024). *Índice Global de Estado de Derecho 2024*. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2024/Bolivia/>

ENTREVISTAS REALIZADAS
OCTUBRE 2024 - MAYO 2025

NOMBRE	OCUPACIÓN	CIUDAD
Alberto Pérez Ramos	Presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)	Potosí
Álvaro Orozco	Analista político, trabaja en temas de desarrollo	Sucre
Ana Lucía Gavarreque	Docente en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en la carrera de Ciencia Política	Cochabamba
Andrés Gómez Vela	Periodista	La Paz
Cecilia Requena	Senadora nacional por Comunidad Ciudadana (CC)	La Paz
Centa Rek López	Senadora nacional de CREEMOS por el Departamento de Santa Cruz.	Santa Cruz
Claudia Herbas Siles	Politóloga, master en descentralización en políticas públicas	La Paz
Cristian Egüez	Activista LGTBQ+	Santa Cruz
Eduardo Lohnhoff Bruno	Militante del Partido Comunista de Bolivia	La Paz
Elena Camacho Quintela	Coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales en UTEPSA de Santa Cruz	Santa Cruz
Emma Lazcano	Analista política	Cochabamba
Erika Brokman	Psicóloga y politóloga	Cochabamba
Fátima Tardío	Docente de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco Xavier	Sucre
Fernando Mayorga	Sociólogo y doctor en Ciencia Política. Director del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU)	Cochabamba
Franz Flores	Economista y doctor en ciencia política. Docente universitario	Sucre
Gabriela Canedo Vázquez	Socióloga y antropóloga. Docente universitaria e investigadora	Cochabamba
Gastón Zientarski	Coordinador departamental de la Red de Líderes por la Democracia y Desarrollo (RELIDD)	Cochabamba
George Komadina	Diputado nacional por Comunidad Ciudadana (CC)	Cochabamba

NOMBRE	OCUPACIÓN	CIUDAD
Guido Cortez Franco	Director del CERDET	Tarija
Henry Gutiérrez	Diputado uninominal por la Alianza Creemos, suplente de la C-47	Santa Cruz
Henry López Álvarez	Presidente del Consejo Municipal de Potosí	Potosí
Inés Morató Martínez	Representante de la OTB El Jardín de Cochabamba	Cochabamba
Leidy Guzmán Arispe	Presidenta de la Asociación Departamental de Concejales y Alcaldesas del Departamento de Santa Cruz	Santa Cruz
Lilian Denise Yucra Fuertes	Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Potosí	Potosí
Lourdes Chávez de Saucedo	Directora ejecutiva de ACOVICRUZ	Santa Cruz
Luciana Jauregui	Socióloga y analista política	Cochabamba
Marcela Magne Aiza	Promoción y ejercicio de derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad.	Cochabamba
María José Salazar	Diputado Nacional por Comunidad Ciudadana por el departamento de Santa Cruz	Santa Cruz
María Teresa Zegada	Socióloga	Cochabamba
Miguel Castro	Fundación Avina en Bolivia	Tarija
Oscar Ortiz	Rector de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz	Santa Cruz
Oscar Sandy	Concejal municipal del MAS en Sucre	Sucre
Patricia Paputsakis Burgos	Abogada y ex presidenta del Colegio de Politólogos de Cochabamba	Cochabamba
Paula Peña	Historiadora	Santa Cruz
Pedro Andrés Badrán León	Asambleísta departamental por la Alianza SUMATE por Cochabamba	Cochabamba
Raykha Flores	Jefa de prensa de Correo del Sur	Sucre
Ricardo Fuentes Vélez	Abogado especializado en temas de comercio internacional e integración	Sucre
Santiago Terceros	Docente universitario y activista político	Santa Cruz
Sergio de la Cerda	Asambleísta departamental del MAS por el departamento de Cochabamba	Cochabamba

NOMBRE	OCUPACIÓN	CIUDAD
Vania Sandoval Arenas	Comunicadora social, politóloga	Snata Cruz
Viviana Asunta Mariscal Rojas	Docente en la Universidad UTEPSA y en la Universidad Privada Domingo Sabio	Santa Cruz
Viviana Schwartz	Doctora en filosofía, directora de CIUDADANIA	Cochabamba
Vladimir Peña Virgüez	Exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz	Santa Cruz
Vladimir Torres	Abogado y politólogo, profesor e investigador independiente	La Paz



9 789995 496296

